C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LANDELINO LAVILLA ALSINA

Sesión Plenaria núm. 167

celebrada el miércoles, 13 de mayo de 1981

ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de Comisiones (continuación):

— De la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de Ley de Crédito Extraordinario por 459.048.550 pesetas, para sufragar los gastos del referéndum autonómico de Andalucía. («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, núm. 176-II, de 6 de mayo de 1981.)

— De la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de Ley de Crédito Extraordinario por 499.707.668 pesetas, para subvencionar la adquisición de papel prensa de producción nacional consumido durante el segundo semestre de 1979. («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, núm. 178-II, de 6 de mayo de 1981.)

— Debate y votación de totalidad del Real Decreto-ley 8/1981, de 24 de abril, sobre creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos. («Boletín Oficial del Estado», núm. 102, de 29 de abril de 1981.)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

— Sobre informes previos de fincas manifiestamente mejorables (del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso). («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, núm. 110-I, de 30 de octubre de 1980.)

— Sobre libertad de edición de impresos periódicos sin limitación de fechas (del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso). («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, núm. 114-I, de 5 de noviembre de 1980.)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» núm. 168, del 14 de mayo de 1981.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

Se continúa con el orden del día.

Dictámenes de Comisiones (continuación):

Página

De la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de Ley de Crédito Extraordinario por 459.048.550 pesetas, para sufragar los gastos del referéndum autonómico de Andalucía . . . 10171

Fueron retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y seguidamente fue aprobado el proyecto sin discusión.

Página

De la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de Ley de Crédito Extraordinario por 499.707.668 pesetas, para subvencionar la adquisición de papel prensa de producción nacional consumido durante el segundo semestre de 1979 10171

El señor Ramos Fernández-Torrecilla defiende una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Turno en contra del señor Bravo de Laguna Bermúdez (Grupo Parlamentario Centrista). Nuevas intervenciones de estos dos señores diputados. Fueron aprobados los artículos 1.º, 2.º y 3.º del proyecto, y rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que proponía la adición de un nuevo artículo 4.º. Queda, pues, aprobado en estos términos el dictamen de la Comisión.

Página

Debate y votación de totalidad del Real Decreto-ley 8/1981, de 24 de abril, por el que se crea el Instituto Nacional de Hidrocarburos. 10173

Para presentar el real decreto-ley hace uso de la palabra el señor Ministro de Industria y Energía (Bayón Mariné). Turno en contra del señor Tamames Gómez (Grupo Parlamentario Mixto). Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen los señores Elorriaga Zarandona (Grupo Parlamentario

Vasco-PNV), Gasoliba Bohm (Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana), Triginer Fernández (Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña), Montserrat Solé (Grupo Parlamentario Comunista) y Barón Crespo (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso).

Al llegar a este punto del debate, el señor Presidente informa a la Cámara del atentado que acaba de sufrir el Papa Juan Pablo II, en la Plaza de San Pedro, de Roma, ignorándose en este momento cuál sea su estado. Creyendo interpretar el sentir de la Cámara, expresa deseos por la recuperación de tan ilustre persona. Termina pronunciando palabras de condena de esta clase de atentados.

El señor Martín Oviedo se suma a las palabras del señor Presidente, y seguidamente fija la posición del Grupo Parlamentario Centrista en relación con el real decreto-ley que está sometido a debate.

Efectuada la correspondiente votación, fue acordada la convalidación de este real decreto-ley. Seguidamente, a petición de varios grupos parlamentarios, se efectúa la oportuna votación y se acuerda su tramitación como proyecto de ley.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

Toma en consideración de proposiciones de ley:

Página

Sobre informes previos de fincas manifiestamente mejorables (del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso) 10191

El señor Secretario (Torres Boursault) da lectura de la comunicación del Gobierno exponiendo su criterio sobre la toma en consideración de esta proposición de ley. A continuación, lee una comunicación de la Comisión de Agricultura, exponiendo también su criterio sobre esta proposición de ley.

El señor Calahorra Téllez (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso) defiende la proposición de ley. Le contesta, en representación del Gobierno, el señor De la Torre Prados (Grupo Parlamentario Centrista). Fue rechazada la toma en consideración de esta proposición de ley. Para explicación del voto, intervienen los señores García García (Grupo Parlamentario

Comunista), Calahorro Téllez (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), Arredonda Crecente (Grupo Parlamentario Andalucista) y De la Torre Prados (Grupo Parlamentario Centrista).

Página

Sobre libertad de edición de impresos periódicos sin limitación de fechas (del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso) 10203

El señor Cano Pinto (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso) defiende la toma en consideración de esta proposición de ley. En nombre del Gobierno contesta el señor Herrero Rodríguez de Miñón (Grupo Parlamentario Centrista). Efectuada la correspondiente votación, fue acordada la toma en consideración de esta proposición de ley. Para explicación del voto, intervienen los señores Fraga Iribarne (Grupo Parlamentario de Coalición Democrática) y Riera Mercader (Grupo Parlamentario Comunista).

El señor Presidente anuncia que el Pleno continuará mañana, a las cuatro y media de la tarde.

Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco de la noche.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

DICTAMENES DE COMISIONES (continuación):

DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE CREDITO EXTRAORDINARIO POR 459.048.550, PESETAS, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL REFEREDUM AUTONOMICO DE ANDALUCIA

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario de 459.048.550 pesetas, para sufragar los gastos del referéndum autonómico de Andalucía.

Hay mantenidas enmiendas por el Grupo Socialista del Congreso.

El señor SOTILLO MARTI: Quedan retiradas, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso a este proyecto de ley, vamos a proceder a la votación.

Se somete a votación el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario que ha sido enunciado.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 204; 203 favorables; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, en los términos en que figuran en el dictamen de la Comisión, el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario de 459.048.550 pesetas para sufragar los gastos del referéndum autonómico de Andalucía.

DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE CREDITO EXTRAORDINARIO POR 499.707.668 PESETAS, PARA SUBVENCIONAR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL Prensa DE PRODUCCIÓN NACIONAL CONSUMIDO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1979

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario de 499.707.668 pesetas, para subvencionar la adquisición de papel prensa de producción nacional consumido durante el segundo semestre de 1979. Hay mantenida una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Tiene la palabra el señor Ramos Fernández-Torrecilla.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECILLA: Señor Presidente, señoras y señores diputados, muy brevemente. Cada vez que la Cámara tiene que ocuparse del tema de la ayuda a la prensa, nuestro grupo, como viene siendo habitual, plantea la necesidad de que una ley sustantiva del Parlamento regule las formas, condiciones y requisitos para la concesión de estas ayudas y que ello no quede a la discrecionalidad del correspondiente Secretario de Estado para la In-

formación, entre otras razones, porque ya tuvimos ocasión de ver, cuando se discutieron los Presupuestos Generales del Estado, cuáles eran los criterios localistas con que se estaban distribuyendo estas ayudas.

Ahora el crédito extraordinario que vamos a aprobar trata precisamente de aquella parte de la ayuda a la prensa en donde los criterios objetivos están más claros, que es la subvención al papel prensa, si bien tendríamos que objetar también en relación con ello que ignoramos por qué razón se ha subido bastante esta subvención sin que conste en el expediente cuáles son los motivos de la misma. Además que nos parece que la pura certificación de la empresa que suministra el papel como instrumento para asegurar o para conceder la subvención, nos parece que es un criterio no excesivamente fiable. Creemos que este tipo de cosas deberán ser revisadas.

Pero no nos preocupa tanto, como digo, el fondo de este crédito extraordinario, que de alguna manera tiene un cierto automatismo con respecto al consumo de papel, cuanto el resto de las ayudas que figuran en el presupuesto de la Secretaría de Estado para la Información.

Nuestra propuesta, por tanto, es que se añada un artículo 4.º nuevo, para que el Gobierno, en el plazo de seis meses, remita al Congreso de los Diputados una ley en que queden perfectamente reguladas las subvenciones a la prensa y establecidos en ella, por la voluntad democrática, los requisitos necesarios para la ayuda a la prensa. Nos parece que es un tema de gran trascendencia. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de que la prensa reciba estas ayudas y no voy a insistir, porque se ha dicho muchas veces que una sociedad libre sin prensa no puede existir. Pero creemos también que tiene que ser la voluntad soberana de esta Cámara la que decida cómo se distribuyen esas ayudas y no unos criterios puramente localistas, como los que empleaba el anterior Secretario de Estado para la Información.

El señor PRESIDENTE: Para turno en contra de esta enmienda, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, señorías, tal y como expusimos en la Comisión de Presupuestos cuando se estudió este proyecto de crédito extraordinario, nosotros nos vamos a oponer a la enmienda so-

cialista, porque creemos que es una enmienda artificial incluida en este proyecto de ley.

Consideramos que no es buena técnica legislativa el establecer, en un proyecto de ley de crédito extraordinario, una obligación al Gobierno de remisión de un texto legislativo. Esto, en todo caso, podría hacerse a través de una proposición no de ley o una moción, pero no a través de un crédito extraordinario.

Creemos que la cuestión, por tanto, está fuera de lugar, y por esta razón, por no ser materia de ley, y por no ser esta ley el vehículo adecuado, nosotros nos oponemos a esta enmienda.

El PRESIDENTE: Tiene la palabra, en turno de rectificación, el señor Ramos.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECILLA: Podría citar, señor Presidente, algunos antecedentes en donde las leyes establecen el mandato al Gobierno para que remita otra nueva ley. Podría citar algún otro antecedente. Por ejemplo, les recuerdo la Ley de Presupuestos de 1980, la ley sobre incompatibilidades. Pero creo que no merece la pena entrar en el tema.

Lo que sí está claro es que hay, en la discusión de los presupuestos, una distribución, me atrevería a decir, arbitraria, de ayudas a la prensa, y nosotros pretendemos que, efectivamente, eso quede regulado en una ley, que eso tenga todas las garantías de objetividad, como no puede ser de otra manera en una sociedad libre.

De todas formas, el señor Bravo de Laguna podía haberse opuesto a mi enmienda con un argumento mejor, y es haber prometido, en nombre de su grupo, en nombre del Gobierno, su intención de remitir esa ley. Pero mucho me temo que no tiene el Gobierno intención de que eso sea decidido por una ley en el Parlamento, sino que pretende que siga estando al albur de las autoridades administrativas que regulan este tema.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Si el Grupo Socialista entiende que existe algún tipo de arbitrariedad, hay otros mecanismos de control parlamentario para ponerlos de manifiesto. No creemos que sea un buen sistema el tratar de incluir, como materia de ley, aquello que nosotros entendemos que puede ser regulado perfectamente por vía reglamentaria.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

El proyecto de ley según figura en el dictamen de la Comisión consta de tres artículos, y el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso propone la adición de un artículo, que sería el 4.º

Vamos a votar, en primer lugar, el texto del dictamen de la Comisión y, seguidamente, someteremos a votación la adición propuesta por el Grupo Socialista.

Se somete, pues, a votación, en primer lugar, el texto del proyecto de ley según figura en el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 224 votos emitidos, todos ellos favorables.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del proyecto de ley en sus artículos 1.º, 2.º y 3.º, tal como figuran en el dictamen de la Comisión.

Se somete ahora a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que propone la adición de un artículo, que sería el artículo 4.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 227; 102 favorables; 119 negativos; seis abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Socialista del Congreso a este proyecto de ley. En los términos, pues, en que figura en el dictamen de la Comisión queda aprobado el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario de 499.707.668 pesetas para subvencionar la adquisición de papel prensa de producción nacional consumido durante el segundo semestre de 1979.

DEBATE Y VOTACION DE TOTALIDAD DEL REAL DECRETO-LEY 8/1981, DE 24 DE ABRIL, DE CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIDROCARBUROS

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a debate y subsiguiente votación de totalidad el Real Decreto-ley 8/1981, de 24 de abril, de creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos.

Para la presentación de este Real Decreto-ley tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Bayón Mariné): Señor Presidente, señoras y señores diputados, cuando el Plan Energético Nacional debatido por el Pleno de este Congreso a finales de julio de 1979 señaló como objetivo prioritario la reducción de la dependencia del petróleo desde un 68 por ciento hasta un 50 por ciento, se estaba señalando un objetivo que, de acuerdo con los datos que hoy día tenemos, es perfectamente cumplible y seguramente superable en los años horizontes del Plan. Pero este objetivo no altera el hecho de que el petróleo seguirá siendo la fuente principal de energía para nuestro abastecimiento, con una incidencia creciente sobre nuestra economía, dada la previsible evolución de los precios y con los riesgos de desabastecimiento que origina una demanda creciente frente a una oferta muy estabilizada, circunstancia que coloca el mundo del petróleo como una cuestión estratégica fundamental en el panorama de la economía española de los próximos años. Por ello, tiene una importancia económica y política sustancial la estructuración que en España se haga del sector del petróleo.

En España, el Monopolio de Petróleos creado en 1927 pretendió dotar al país de un instrumento que hiciera posible desarrollar una auténtica política petrolífera a través de un organismo del Estado que debería acometer todas las fases del ciclo, ya que entre las obligaciones que por ley se imponían a la entonces Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos se encontraba la adquisición de yacimientos en los países productores, el establecimiento de una industria del refino y la formación de una flota para el transporte del petróleo importado. Se trata, en resumen, de una política petrolífera nacida al amparo de un signo marcadamente fiscal, como era lógico en una época en que la estructura administrativa daba una preponderancia en este orden de tratamientos a los criterios de tipo puramente fiscal.

En el transcurso de los años, la legislación fragmentaria que ha venido desarrollándose en materia de política de hidrocarburos, la trascendencia que el tema ha tomado por la situación del mercado y la creación de nuevos órganos del Estado con competencias específicas, han ido conduciendo a una situación que podría describirse de acuerdo con las siguientes notas.

Primero, la falta de integración vertical del sector, en contra de lo que es habitual en los países de economía de mercado, apareciendo separadas

las empresas de exploración, producción, transporte, refino, petroquímica y distribución.

En segundo lugar, una muy fuerte participación del sector público en las distintas fases del proceso de producción, pero con una fuerte proliferación de las empresas públicas en cada uno de los subsectores, aunque con ausencia importante de empresas multinacionales en los mismos.

En tercer lugar, una falta de dimensión del sector, más llamativa sobre todo en un país que tiene continuamente, de manera preocupante, que acudir a los mercados internacionales.

En cuarto lugar, una importante disgregación y atomización de las competencias administrativas a ejercer por los distintos órganos del Estado, lo que produce en ocasiones inconvenientes de funcionamiento y dificultades de coordinación.

Finalmente, la existencia de un monopolio en el que coinciden el aspecto mercantil de la distribución y el concepto fiscal que hace definir los ingresos y gastos de su monopolio como ingresos y gastos del Estado, al tiempo que se produce una renta en favor del mismo. Ello unido al hecho de que, además, la Compañía administradora participa indirectamente para la realización de sus propias actividades en otro orden de actividades que no son propiamente del ciclo de distribución y, en consecuencia, del propio concepto comercial del monopolio.

Fácil conclusión de este conjunto de notas es llegar a la necesidad ineludible de ordenar el sector público de hidrocarburos. La necesidad de esta reestructuración ha sido puesta de manifiesto en los últimos años de una manera creciente. En los Pactos de la Moncloa, en su capítulo de política energética, se dice textualmente que «en el subsector de hidrocarburos se procurará la coordinación de las competencias administrativas y, en lo posible, la existencia de un organismo que agrupe todas las participaciones públicas en el subsector.

En las resoluciones aprobadas por el Pleno de esta Cámara con motivo de la discusión del Plan Energético Nacional, se propugna la intensificación del grado de coordinación de las empresas refinadoras participadas por el Estado de forma que, tan pronto como sea posible, esta coordinación se concentre en un sólo organismo.

Consecuencia de estos compromisos, contraídos por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, que reiteradamente se han venido pronunciando por la necesidad de disponer de

este instrumento, se ha procedido, durante este tiempo, a examinar las distintas opciones posibles para llegar a su configuración.

En su discurso de investidura, el Presidente del Gobierno manifestaba su voluntad política de acelerar un proceso que consideraba prioritario, y, finalmente, el Gobierno remite a esta Cámara el decreto-ley 8/1981 por el que se constituye el Instituto Nacional de Hidrocarburos.

Los criterios principales que han presidido la redacción de este decreto-ley y la configuración del organismo son los siguientes:

Primero, la unidad de la política de Estado en materia de hidrocarburos sobre la base de una consideración de la misma con criterios de política industrial y no preferentemente de política fiscal.

Es obvio que los ingresos procedentes de la imposición en materia de hidrocarburos son de gran importancia porcentual en el conjunto de los ingresos públicos presupuestarios del Estado español en el momento actual, pero la posibilidad de obtener tales ingresos no debe enturbiar la definición de una política energética tendente, sobre todo, a obtener una eficacia en el funcionamiento de las empresas públicas del sector.

Para ello, se ha considerado importante obtener, a través de la identificación en un órgano de las participaciones públicas de las empresas, una integración vertical.

En el mundo, todas las grandes empresas petroleras están integradas verticalmente y ello es imprescindible si se quiere obtener una economía y una dirección industrial que resulte efectiva.

Esa integración vertical permite superar los riesgos de la inversión; desenvolverse en el régimen de oligopolio existente en la industria mundial del petróleo, con una dimensión de capacidad de compra adecuada; disponer de los apoyos empresariales desde distintas fases para abordar y sostener las amplias y costosas actividades de exploración y producción, al tiempo que esta integración no supone la desaparición de la personalidad singular de cada una de las empresas integradas que conservan su capacidad y autonomía de gestión.

Por otra parte, se encuentran instrumentos de la recaudación fiscal que tienen un significado completamente distinto, puesto que no afectan a todos los productos derivados del petróleo y, por otro lado, porque puede llevarse perfectamente a

cabo a través de distintos instrumentos de política fiscal, razón por la cual ha entendido el Gobierno que debe primar la visión de la política industrial y energética respecto a la fiscal, y de ahí la dependencia de este nuevo Instituto del Ministerio de Industria y Energía.

La segunda característica válida para la definición de este Instituto es el respeto tenido en su configuración a la actual dimensión del Monopolio de Petróleos. La reestructuración ha respetado la existencia del Monopolio en su dimensión actual. Se mantiene éste, por tanto, en las actividades que viene desarrollando de incorporación, distribución y venta de productos petrolíferos. Consecuentemente, las propiedades y derechos del Estado afectados al Monopolio por formar parte del sistema de distribución de productos monopolizados, continúa en idéntica situación jurídica, sin pasar a integrarse en el patrimonio del nuevo Instituto.

Se mantiene asimismo el carácter administrador de la Compañía del Monopolio, cuyos consejeros son designados por el Gobierno, y en la que continuará ejerciendo su actividad una delegación del mismo que vela por la regularidad en la administración del Monopolio, en relación con las funciones fiscales correspondientes.

Los demás derechos y bienes del Monopolio que no formen parte del sistema de distribución se transfieren al nuevo Instituto, teniendo particular importancia, entre los mismos, los permisos de investigación y las concesiones de explotación correspondientes, ya que su integración en el patrimonio del ente va a permitir una actuación coherente de la empresa pública en materia de tal trascendencia.

Tercer criterio importante para la configuración de esta nueva figura en el marco de la política de hidrocarburos es el mantenimiento de un principio de equidad en el trato por parte del Monopolio a las distintas empresas de refino públicas o privadas.

Para evitar que pueda producirse como consecuencia de la unificación de titularidades accionarias en un ente, un trato discriminatorio del Monopolio a las distintas empresas de refino, se produce la residencia en los distintos órganos de la Administración del Estado de las competencias principales relativas a la relación entre el Monopolio y las distintas compañías refinadoras, principalmente por lo que se refiere a precios de pro-

ductos, a precios ex-refinería y a la liquidación con las Compañías.

Por ello, el proyecto es absolutamente neutro desde el punto de vista de la dialéctica empresa pública o privada, o de la neutralidad en el mercado en relación con la posición de estas empresas, sin que tampoco sea un paso de nacionalización del sector ni un paso de incremento de privatización alguna.

Y, finalmente, es otro punto importante en la configuración del Instituto la clarificación de las competencias administrativas, aspecto que ha sido sustancial y en el que principalmente, como he dicho, lo que se ha producido ha sido la residencia en el Gobierno de aquel conjunto de facultades definidoras de la política de hidrocarburos, de la aprobación de un Plan Nacional de Combustibles, que se ha revelado como un instrumento sumamente útil hasta el momento presente, de la relación de las refinerías con el Monopolio, y del mantenimiento en todo momento de un trato de igualdad entre las distintas empresas que son parte en el proceso.

Se aclaran, como es obvio, las competencias entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Energía, determinándose el mantenimiento de las competencias del primero en relación con aquellos aspectos de orden exclusivamente fiscal que hacen referencia a la vigilancia del funcionamiento del Monopolio para el mantenimiento de los ingresos fiscales correspondientes, lo que impone en algunos momentos la existencia de competencias compartidas entre ambos Departamentos para la aprobación de determinadas cuestiones que deben ser propuestas por el Instituto.

¿Cuál es la organización que se ha dado a este nuevo ente público? Ha parecido que el medio más eficaz de coordinación de estas actividades era la creación de una nueva entidad jurídico-pública con un ámbito específico delimitado al área de los hidrocarburos, entidad que se define sustancialmente por dos notas: por un lado, por tratarse de un ente público sometido al derecho privado y, por otra parte, por no estar incluida en la organización del Instituto Nacional de Industria.

En primer lugar, por tratarse de un ente público sometido al derecho privado. No se trata, como es conocido de los señores diputados, de una figura jurídica nueva, figura que tiene un entronque antiguo desde la aplicación del famoso

artículo 5.º de la Ley de Entidades Estatales Autónomas del año 1958, y que tiene ya, en el momento presente, aplicación en distintas personalidades jurídicas de nuestro derecho. Tiene la ventaja de conceder un carácter de planificación a la entidad que se crea, al mismo tiempo que permite dotarla de una gran agilidad empresarial para su funcionamiento, permitiendo que el personal, los contratos y el régimen jurídico en general de la organización estén sometidos al Derecho privado, civil, mercantil o laboral, y solamente tengan las limitaciones del Derecho público administrativo en la medida que son establecidas por la propia normativa estatutaria que crea el organismo.

Por otra parte, ha parecido conveniente que este organismo sea independiente y que no esté incluido en la estructura del actual Instituto Nacional de Industria. Y ello por varias razones distintas. En primer lugar, existe una razón de carácter puramente organizativo, y es el hecho de ejercitar una preferencia política respecto a la existencia de una organización jurídica nueva para llevar a cabo esta función. La razón de ello se basa sustancialmente en criterios de eficacia. Se entiende que será más eficaz tener el Instituto separado del Instituto Nacional de Industria por la propia especificidad de la función que va a desarrollar, por el hecho de no obtenerse unas ventajas singulares de la inclusión en el Instituto, que se encuentra hoy día en una situación de dimensión que dificulta en muchas ocasiones su funcionamiento y, además, por la diferente filosofía sustancial de las acciones que debe desarrollar el Instituto de Hidrocarburos, el sector del petróleo, de aquellas otras más imbuidas en un mundo de reconversión industrial en el momento presente, que deben ser desarrolladas por el Instituto Nacional de Industria, sin perjuicio, naturalmente, de que esto no supone de manera alguna un desmantelamiento de la estructura del Instituto Nacional de Industria que, junto a la realización de sus actividades industriales puras, continúa realizando actividades industriales en el orden de los servicios y actividades industriales en el orden energético, principalmente en el sector eléctrico, en el sector de carbón y en el sector de nuevas energías.

El decreto-ley que se presenta a esta Cámara, y para el que el Gobierno pide su ratificación, constituye un hito en la historia de la política energética española. Ha sido un tema objeto de

largos años de dudas y debates y se ha buscado una solución que, a juicio del Gobierno, ofrece todas las garantías de eficacia, de gestión, de coordinación de los distintos órganos administrativos, de subordinación de los intereses recaudatorios a la política energética y de respeto a la necesaria iniciativa privada en este campo.

La inconveniencia de mantener una situación de interinidad en la gestión de las empresas por los graves perjuicios que esto pudiera producir en un momento como el presente, tan lleno de tensiones, en la gestión de los hidrocarburos, ha impulsado al Gobierno a la consideración de la urgencia a efectos de la aprobación de este decreto-ley, pero ello no es óbice para que el Gobierno y el Grupo Parlamentario de UCD entiendan positiva la tramitación como proyecto de ley de este decreto-ley, pues una más resposada meditación puede, sin lugar a dudas, enriquecer este instrumento del que todos esperamos obtener un fruto provechoso desde el punto de vista de la economía nacional y de la política energética.

El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir el debate.

¿Grupos parlamentarios que deseen consumir turno a favor o en contra? *(Pausa.)*

Grupo Parlamentario Mixto, turno en contra.

¿Socialistas de Cataluña? *(Pausa.)* ¿Grupo Parlamentario Vasco? *(Pausa.)*

Estoy pidiendo turno en contra o turno a favor, no turno de fijación de posiciones de grupo.

Entiendo que como turno únicamente se ha pedido el turno en contra del representante del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Es así? *(Pausa.)*

¿Para consumir un turno en contra? *(Pausa.)*

No va a haber segundo turno, puesto que no hay turno a favor.

Para consumir un turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Tamames.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados, el presente Decreto-Ley 8/81 de 24 de abril, que está actualmente en debate de convalidación, es el octavo que se publica a lo largo del año y concretamente en el primer cuatrimestre, lo cual significa que de seguir así, en este año 1981 esta Cámara batiría el record de debates sobre convalidaciones de Decretos-Leyes enviados por el Gobierno, lo cual, señor Presidente, me parece que es preocupante.

porque significa que el Gobierno está utilizando el expediente del Decreto-Ley para tratar de cuestiones de alta importancia, y eso es hurtar a las Cortes Generales su verdadero papel.

Por otro lado, el señor Ministro en su intervención, ha dicho que el Gobierno consideró que era urgente la necesidad de establecer esta normativa, pero no ha explicado verdaderamente por qué. Porque en realidad, como él mismo ha reconocido, el tema de un «holding» público para hidrocarburos es un tema planteado entre los estudiosos de la economía española hace mucho tiempo, y por no remontarnos más allá del período de la democracia, planteado desde octubre de 1977 en los Pactos de la Moncloa.

Luego si, como ha dicho el señor Ministro, ha habido largas dudas y debates, las dudas serán del Gobierno, porque en realidad el planteamiento que se hizo en octubre de 1977 estaba muy claro, y los debates, desde luego, no se han producido aquí. Serán debates internos de la Administración Pública, porque en el caso del Parlamento es la primera vez que se discute este tema. Es decir, se discute este tema específicamente, porque en el Plan Energético Nacional, hace dos años, se planteó ya la necesidad de un organismo público que coordinara todas las actividades del sector de hidrocarburos, sin que haya habido hasta ahora una manifestación clara de intenciones del Gobierno, salvo la Corporación, seguramente de efímera vida petrolera, que ahora va a quedar subsumida de hecho en este nuevo organismo.

Entonces, lo que está claro, señor Ministro, es que si hubo una ley para el Consejo de Seguridad Nuclear, para un sector importante de generación de energía, ¿por qué no hay una ley también para estudiar a fondo el tema del Instituto Nacional de Hidrocarburos, el INH?

En realidad el sector de hidrocarburos es tan importante o más, actualmente bastante más importante, que el sector de energía nuclear. Cuantitativamente, lo sabe todo el mundo, dependemos casi en un 65 por 100 en lo relativo a la energía primaria, del sector de hidrocarburos, mientras que la energía nuclear representa un submúltiplo bastante reducido de esa proporción. Y es que además en este decreto-ley, so pretexto de regular la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos, se está también regulando o revisando lo que es el concepto del Monopolio público de petróleos, y eso tiene consecuencias fiscales y consecuencias industriales importantes, que se

tendrían que haber valorado en un debate, no en un debate global, como es éste, que es un poco el juego de lo tomas o lo dejas, votas si o votas no, pero no puedes votar sobre artículos, matizando, interviniendo con enmiendas y pidiendo explicaciones concretas en Ponencia y en Comisión.

Esto es, en realidad, un lo tomas o lo dejas, y además, en cierto modo, va en contra del artículo 88 de la Constitución, cuando se refiere a los temas legislativos, y por mucho que nos diga el señor Ministro que están en condiciones de aceptar que esto se tramitará como proyecto ley, lo cierto es que hoy tenemos una exposición de motivos bien parca, apenas unas líneas, y no tenemos ninguna clase de antecedentes, es decir, la memoria explicativa a que se refiere el artículo 88 de la Constitución.

Yo sé que formalmente no es exigible en los decretos-leyes, pero nos falta, y nos falta lo que es una base documental importante, porque nosotros podemos estar de acuerdo o no con el Consejo de Seguridad Nuclear, pero lo cierto es que en el Consejo de Seguridad Nuclear, en la ley, tuvimos mucha documentación. En la ley del Plan Energético Nacional tuvimos mucha documentación, y en este caso no se nos aporta ninguna clase de documentación y se nos dice: ahí tienen ustedes el Decreto-ley, apruébenlo entero o rechacénlo entero, y esa no es la forma de discutir los asuntos públicos, y mucho menos de legislar, aunque se ponga por delante el propósito de desarrollar el tema como ley ordinaria más adelante. ¿Por qué, señor Ministro? A mí me parece que habría que estudiar la valoración de los activos. ¿Por qué en el artículo 4.º del Decreto-ley, al hacer referencia al patrimonio fundacional, se habla de una dotación inicial de 300 millones de pesetas? ¿Cómo se justifican los 300 millones de pesetas? ¿Por qué 300 y no 500 ó 150? ¿Por qué no se valora exactamente lo que representan las aportaciones del Estado en esas ocho empresas que se mencionan aquí y, en cambio, se nos dice, en una de las disposiciones finales, que tendrá que haber un estudio de lo que eso representa? ¿Por qué no se trae el estudio ahora para saber lo que estamos votando? Porque, en realidad, aquí no se sabe lo que estamos votando; porque se promete un estudio, una especie de valoración, de inventario de esos bienes que se transfieren y de esos derechos que se transfieren, pero no lo tenemos en estos momentos y no podemos enjuiciar la magnitud del ente que estamos discutiendo. Porque sí: nos

podemos ir al «ranking» de las 1.500 empresas o a las memorias de estas ocho, o bien hacer una valoración por nuestra cuenta, pero todo el mundo sabe que esas valoraciones no son necesariamente las mejores y tendrían que hacerse con otros criterios, seguramente distintos de los que se siguen para preparar las memorias y llevarlas a la Bolsa o al conocimiento de las Juntas Generales.

Me parece, además, que no está explicado claramente por qué se crea un nuevo «holding», ya que vamos a tener tres: el Instituto Nacional de Industria, la Dirección General del Patrimonio del Estado y el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Van a quedar todavía por ahí algunas empresas públicas dispersas, pero no hay una concepción de la empresa pública. A pesar de las reiteradas manifestaciones sobre la necesidad de enviar a este Congreso un proyecto de estatuto de la empresa pública, seguimos sin tenerlo. No tenemos una teoría de las empresas públicas en España, y no hay nada más práctico que una buena teoría, pero seguimos sin tenerla. Todavía sabemos que las empresas públicas siguen siendo focos prebendarios, siguen siendo fuentes de poder, siguen siendo mecanismos de intervención, no siempre racional, si no hay esa teoría y ese control de carácter global.

Pero es que, además, en el Decreto-ley que aquí se presenta hay toda una serie de zonas oscuras. Por ejemplo, cuando en el artículo 9.º se habla del total importe de los beneficios, se dice que los que, en su caso, obtenga el INI se ingresarán en el Tesoro. ¿Qué es esto? ¿Qué concepto es este de los beneficios de un «holding»? ¿Qué son los dividendos que reparten las ocho compañías y que pasan al «holding» y que después se consideran beneficios del Instituto? ¿Cómo se computan esos beneficios? Eso se tiene que discutir y desarrollar. No basta decirlo así. La decisión del reparto de dividendos es de los Consejos de Administración, sustanciada después en las Juntas Generales de Accionistas, donde tiene una proporción muy importante el Estado. Es una decisión, en buena parte, discrecional y tendría que haber unos criterios de acción política para saber cómo computamos esos beneficios y cuáles son los objetivos de los mismos, si van a ser para la expansión de las actividades del «holding» o si se van a convertir en simple mecanismo de carácter recaudatorio.

Se dice en el artículo 10, segundo párrafo, que las inversiones del Monopolio se podrán dedicar

solamente al mantenimiento y desarrollo de la red y a las actividades de distribución, lo cual significa que con una línea se introduce un cambio radical en lo que es el actual estatuto del Monopolio de Petróleos y de las funciones de su compañía arrendataria. En una línea, sin ninguna clase de justificación. ¿Qué significa esto? ¿Que CAMPSA ya no va a poder tener ningún tipo de actividad en entidades que no sean meramente de almacenamiento y distribución, es decir, de la red? Pues que se diga y que se explique, porque, de otra forma, queda oscuro.

También se habla en el artículo 11.5 del PAI. Todos sabemos en esta Cámara lo que es el PAI, pero la gente lee también las leyes —o se supone que las tendrían que leer, como se dice en el Código Civil— y no sabe lo que es. Habría que explicarlo al final, en el vocabulario, señor Ministro, como se hace en las leyes anglosajonas, que es un criterio muy bueno; porque, de otra manera, empezaremos a emplear siglas en las leyes, con una tendencia a convertirlas en un lenguaje hermético para algunos entendidos, aunque incluso para muchos —y no por esto del PAI, porque todos sabemos aquí lo que es—, llegará un momento en que también se hagan ininteligibles.

En el artículo 14 se dice que se mantiene el delegado del Gobierno en CAMPSA, y en una de las Disposiciones adicionales se dice que se va a reorganizar la delegación del Gobierno en la Campsa, y lo que hay que preguntar es por qué se mantiene la delegación del Gobierno en la CAMPSA. ¿No hay ya un Instituto Nacional de Hidrocarburos? ¿Por qué vamos a poner albarda sobre albarda? ¿Es que el Instituto no es ya la presencia del Gobierno en las ocho empresas en que participa? ¿Por qué tenemos que mantener una delegación del Gobierno en una de esas ocho empresas y no en las otras siete? Es una pregunta que yo creo que también es importante y a la cual de momento no tenemos contestación y además quedamos en una concesión de facultades importantes al Gobierno, porque como el Gobierno tiene potestad para desarrollar este Decreto-ley se dice que podrá desarrollar el aspecto de la delegación del Gobierno en la CAMPSA, pero no dice cómo, no hay criterios y el resultado es que se va a votar sobre algo que no se conoce.

Luego, la Disposición derogatoria; en la Disposición final segunda se dice que se publicará más adelante. ¿Por qué no se publica ahora? ¿Es que no ha habido tiempo desde el año 1977 (Pactos de

la Moncloa), o desde el año 1979 (Plan Energético Nacional) para que algún estudioso de problemas de legislación administrativa haga un repaso y diga cuáles son las disposiciones que se derogan, para evitar toda una serie de problemas y de dudas?

Señor Presidente, señoras y señores diputados, en mi opinión en este Decreto-ley hay muchos defectos, muchas zonas oscuras, muchas inconsistencias, y realmente de esta forma no se puede operar, y es muy poco serio traer a la Cámara un Decreto-ley en estas circunstancias, diciendo que es urgente y dejando toda una serie de aspectos sin aclarar, que los diputados, como representantes del pueblo soberano, tienen derecho a conocer para poder opinar fundadamente.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Ningún otro grupo parlamentario desea consumir un turno a favor, por lo cual vamos a pasar al turno de fijación de posiciones de grupo.

¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? Grupo Parlamentario Vasco (PNV), Grupo Parlamentario Minoría Catalana, Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, Grupo Parlamentario Comunista y Grupo Parlamentario Centrista.

Han solicitado la palabra el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y Grupo Parlamentario Centrista.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA ZARANDONA: Señor Presidente, señorías, muy brevemente para fijar la posición de nuestro grupo y que deseo manifestar, como comienzo de mi intervención, que nosotros vamos a votar que no, que vamos a votar en contra de la aprobación de este decreto. Y lo vamos a hacer por una serie de razones que, como digo, telegráficamente, brevemente, voy a enunciar.

Creemos que en el articulado, en el contenido de este decreto se atenta contra facultades que, de acuerdo con los Estatutos de Autonomía, son competencia de las Comunidades Autónomas, al menos creemos que en el caso del Estatuto Vasco

así ocurre. Es más, entendemos que algunas de las competencias asignadas al ente que se pretende crear con este decreto corresponden a competencias, o están incluidas en competencias que, en el terreno de las actividades industriales, han sido asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Creemos, por otra parte, que las competencias asignadas al ente que se pretende crear aquí de forma casi flagrante atentan a lo que han de ser principios de desarrollo de la actividad económica en una economía de libre mercado, y además encorsetan, hasta límites que en este momento no somos capaces de valorar, a la iniciativa privada y a las empresas privadas que existen en el mercado de productos energéticos. Y esto, señorías, nos sorprende en un Gobierno y en un partido que como el Gobierno de UCD y el partido de UCD pretenden —dicen al menos— potenciar la economía de mercado y no coartar las fuerzas que en él actúan. Pero, sobre todo, lo que más nos preocupa es que con este ente lo que se crea es un verdadero monopolio de los productos energéticos. Un ente al que se le dan omnímodas facultades que anulan prácticamente o hacen muy difícil —en contra de lo que manifestaba el señor Ministro— la subsistencia del sector privado y que nosotros pensamos que es un comienzo, una vía si no de una nacionalización del futuro del sector en cierto modo, sí una nacionalización indirecta, diría.

Por otra parte, la creación de un ente, como el que propone este decreto, cuyo poder económico que va más allá del de cualquier grupo normal, que ha de actuar en una economía, como digo, libre de mercado, porque el volumen de cifra de negocios se va a manejar, con plenos poderes en el área de los productos energéticos y con una incidencia enorme, brutal en la economía española, fundamental, diríamos, porque el tema de los productos energéticos es un tema fundamental, va a ser de cientos de miles de millones de cuya utilización y de los circuitos por donde va a discurrir este caudal van a disponer unas personas en cuya nominación sólo interviene y participa el Gobierno y esta Cámara no puede decir absolutamente nada.

Porque si bien entendemos —y es cierto— que es necesario racionalizar el sector público en sus actuaciones en lo que se refiere a productos energéticos, se observa en el contenido del articulado de este decreto que aquí se nos ha presentado,

una total ignorancia de las Comunidades Autónomas, que ni son contempladas en el decreto, ni lo que es peor aún, el Gobierno al concebir este ente en este decreto no ha tenido —nos consta— el más mínimo intercambio de impresiones con los Gobiernos actualmente existentes. Al menos esto nos consta que ocurre en el caso del Gobierno vasco.

Y esto es grave por el efecto que pueda existir sobre el ejercicio de unas competencias que están recogidas en el Estatuto de Autonomía y que inclusive han sido transferidas. Es grave, señorías, porque cuando se trata de temas, temas que que man, preocupantes; cuando se trata de temas, entonces sí que se tiene en cuenta a las Comunidades Autónomas; entonces el Gobierno sí cae en la cuenta de que hay que compartir solidariamente los problemas y se acude a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, como ha ocurrido en el tema de la reestructuración del sector siderúrgico y del sector naval, en el que ha habido, realmente, participación del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero no se tiene en cuenta su existencia cuando se trata de un tema como éste que supone, inequívocamente, una generación muy importante —la más importante diría yo— de beneficios dentro de la actividad económica.

Y nosotros, señores del Gobierno, señores de UCD, como grupo parlamentario de esta Cámara a la que se le hurta, como ya he dicho anteriormente, la posibilidad de discutir un tema de tanta trascendencia como éste para el desarrollo de la economía española y para el desarrollo de la actividad de distintas Comunidades Autónomas, y como grupo parlamentario y como grupo político soporte de un Gobierno, del Gobierno vasco, decimos que no a este juego; decimos que no, señor Ministro.

Decimos que no, porque es evidente que estamos dispuestos a jugar a las duras, y lo hemos manifestado muchas veces, y el Gobierno de la Comunidad Autónoma con unas competencias lo ha demostrado asumiendo la cuota y la parte de responsabilidad que le corresponden en la función solidaria de una distribución responsable de los problemas del Estado.

Por todo esto, señorías, por no estar dispuesto a que sólo se nos tenga en cuenta para la distribución de las duras y no de las maduras, por eso, y por todas las manifestaciones hechas anteriormente, breve y concisamente, decimos que no a

este decreto. Y seguiremos diciendo que no a cuantos proyectos que debiendo, por sus consecuencias, tener presente la existencia de las Comunidades Autónomas, la existencia de unos Estatutos de Autonomía, la existencia de unos Gobiernos que tienen que asumir unas responsabilidades en sus respectivos ámbitos autonómicos, este Gobierno los ignore olímpicamente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, tiene la palabra el señor Gasoliba.

El señor GASOLIBA BOHM: Señor Presidente, señorías, nosotros creemos que con la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos se ha dado un paso necesario, aunque no suficiente, para la ordenación de la actividad del sector público en el sector energético, absolutamente fundamental en la actual coyuntura económica y que incide con una especial fuerza en la estructuración de nuestro sistema productivo y, creemos, además, que es igualmente positivo por cuanto se sitúa en la línea de los acuerdos establecidos en el Plan Energético Nacional. Además, en estos acuerdos vemos una actuación en línea con nuestros deseos; vemos, por fin, una actuación concreta.

Por todo ello, nosotros manifestamos nuestra postura y la fijamos como favorable a la convalidación de este real decreto sin que ello obste a un examen más detallado e intenso, para discutir algunos de sus detalles y sus aspectos, si esta Cámara acuerda su tramitación como proyecto de ley. Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, tiene la palabra el señor Triginer.

El señor TRIGINER FERNANDEZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados, en relación al decreto-ley que se nos presenta, quisiéramos manifestar en primer lugar un motivo de satisfacción, y es el de que la política que nosotros defendimos en el Plan Energético, por otra parte de alguna forma contenida en su día en los Acuerdos de la Moncloa, se traslade finalmente, aunque sólo sea en parte, al contenido de este decreto-ley. Decreto-ley, por otra parte, que dada su naturaleza entraña una consideración de urgencia que obviamente, nosotros, como Socialis-

tas de Cataluña, no entendemos ni podemos apreciar.

Después de tantos años hablando de la necesidad de construir un organismo o un ente de tal naturaleza, nos parece una tomadura de pelo el que se nos pretenda decir ahora que este es un tema urgente, cuando desde hace tantos años hemos estado trabajando e insistiendo sobre el particular. Lo que yo temo, en resumidas cuentas, es que quizá uno de los obstáculos por los cuales no se ha avanzado en este sentido proceda sencillamente del hecho de que ha sido ésta una reivindicación tradicional de los socialistas, y parece ser que a veces, en esta Cámara, basta con que sea una política de los socialistas la que se proponga para que el grupo parlamentario del Gobierno, para llevar la contra, tenga que defender, paradójicamente, lo contrario, en contra muchas veces del sentido más elemental de racionalidad y de operatividad.

Hay otra cuestión que me parece que es importante resaltar en el contenido, en el fondo de la materia: la dependencia de este organismo.

El Ministro de Industria ha dicho que se había dado un paso adelante en lo que se refiere a la preeminencia de la política industrial, en relación a la política fiscal. Efectivamente es así. El criterio que avala este decreto-ley es el de optimizar una política industrial; sin embargo, a nosotros nos hubiera gustado oír que la preeminencia en cuanto al objetivo que se pretende seguir en relación a este decreto-ley es precisamente lo que pudiéramos llamar política energética. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque para nosotros, y en lo que se refiere al tema de los hidrocarburos, es una cooperación totalizadora, global, de una política energética clara.

Se nos ha dicho que en razón a la eficacia, en este momento se pretende un organismo fuera del INI, entre otras razones porque el hecho de que sea una empresa de considerables dimensiones, el estar dentro del INI podría perjudicar su gestión u operatividad. Nosotros creemos todo lo contrario, y vamos a hablar simplemente de unos cuantos ejemplos.

Precisamente las compañías o empresas más eficaces en relación al tema de los hidrocarburos son empresas grandes, multinacionales, que son mucho mayores que lo que pueda España tener en relación a todo el ámbito de los hidrocarburos. De su magnitud, de su capacidad económica se derivan una serie de ventajas que son las que pre-

cisamente conviene aprovechar, y éstas son las que, al parecer, no se pretenden aprovechar suficientemente por parte del contenido de este decreto-ley.

Siguiendo en estos ejemplos, nos encontramos con que las compañías petrolíferas a nivel internacional, en este momento cuidan de diversificar su campo de actuación invirtiendo en yacimientos de carbón, invirtiendo en investigaciones de energía solar, invirtiendo en fuentes alternativas y, por tanto, de alguna forma intentan llevar una política global coherente en lo que se refiere a política energética.

Nosotros en este momento lo que estamos defendiendo como socialistas es precisamente integrar la política energética, por lo menos, en el ámbito de las fuerzas de las empresas en manos del Estado. No nos parece conveniente ni oportuno, por ejemplo, que empresas como ENHER se dediquen a hacer una investigación y que otras empresas del Instituto Nacional de Industria se dediquen a hacer otro tipo de investigación, sin ningún tipo de coordinación a nivel energético y que, finalmente, pueda hacer otro tanto el nuevo ente o el nuevo organismo que en estos momentos estamos creando.

Por eso, para nosotros, el tema de la dependencia del INI, de la integración de la energía bajo un concepto global no es una cuestión que suponga sacrificar la empresa pública, es simplemente una cuestión de operatividad destinada al cumplimiento de objetivos de carácter energético, que son en este momento los que priman en la economía del país.

Por esto nosotros, señoras y señores diputados, aunque nos parece un avance importante, preferiríamos, con el tratamiento de este decreto-ley por la vía legislativa, poder tener la oportunidad de enmendar su contenido en esta dirección. No sabemos cuál será finalmente la posición de la Cámara, pero esta es nuestra posición. No obstante, vamos a votar afirmativamente el contenido del decreto-ley, puesto que sin ninguna duda nos parece un avance en relación al caos que existía anteriormente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Comunista, tiene la palabra el señor Montserrat.

El señor MONTSERRAT SOLE: Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados, nos

parece totalmente fuera de lugar la utilización del procedimiento del real decreto-ley para un tema de reforma del sector público de carácter estructural de tanta importancia como el que nos ocupa.

No se trata aquí de salvar a la peseta de una especulación o de atender a una emergencia en la cuestión del paro, sino de la reordenación de toda una importantísima fracción del sector público. Pues bien, para discutir de todo esto, y globalmente, se nos presenta estrictamente el texto del real-decreto ley, sin memoria justificativa, sin cifras detalladas, sin que exista un pleno alcance jurídico del decreto, puesto que no está aquí ni el desarrollo de lo contenido en la Disposición final segunda con respecto al conjunto de las normas que van a ser de aplicación a partir de ahora.

El debate de esta cuestión no es nuevo, procede, como se ha dicho, de los Pactos de la Moncloa, procede del debate del Plan Energético Nacional, pero yo creo que incluso procede de antes del surgimiento de la crisis energética de 1974, procede del principio de los años 70, puesto que todo el tema del sector público en España ha sido objeto de fuertes discusiones, incluso antes de la aparición de la crisis energética, ya que existían el tema de CAMPSA y el tema INI como temas interesantes e importantes desde hace muchos años.

La opinión pública, los partidos políticos, han venido fijando sus posiciones. Ahora, con el procedimiento del Decreto-ley se hurta la discusión cuando es más necesario que nunca que temas como éste, que son importantes, pero no dramatizados, encuentren en el Parlamento el marco normal de sus discusión democrática.

Este es uno de los temas cuya discusión en el Parlamento pueden darle al país conciencia de que el Parlamento sirve no solamente para discutir temas apresurados de urgencia, sino para discutir temas que vayan encauzando el futuro.

Con respecto al tratamiento del asunto por Real Decreto-ley debo decir que hay una formulación en la exposición de motivos que creo que también es muy discutible, que es el tema de la interinidad, puesto que, efectivamente, aparece ahí un cierto problema de interinidad. Pero más interinidad es la que está viviendo desde hace muchos años el Instituto Nacional de Industria, la que está viviendo desde hace varios meses, por una falta de definición a fondo de la política industrial y, en cambio, no es éste el camino que había que seguir.

El Real Decreto-ley reincide además en la inercia de UCD por perpetuar modos del pasado a través de la política de decretos y decretos-leyes, como puede ser, si llega en un próximo Pleno a esta Cámara el Real Decreto-ley que se está discutiendo fuera de ella sobre la reindustrialización, que también es un tema de amplio alcance que debería ser objeto de debate con plena responsabilidad por parte de esta Cámara. Pero es que, además, hay otras voces que sí creen que van a poder participar en la discusión, y que han participado ya, como es, por ejemplo, todo el «lobby» privado del petróleo, el cual ha manifestado públicamente lo siguiente: «Hay que mirar el decreto («lapsus» por Decreto-ley) con lupa y con tiempo, ya que la interpretación que pueda sacarse de cada párrafo es muy importante. Si algún punto no queda claro está en el ánimo de los privados pedir al Gobierno que nos amplíe algunos puntos».

Pues bien, nosotros, la representación popular, ya no tendremos a través del procedimiento del Decreto-ley, a menos que haya un trámite por proyecto de ley, que es una forma viciada de discutir el tema, ocasión de discutir detalladamente un tema como éste, mientras que los privados manifiestan públicamente que están en un proceso de negociación con el Gobierno y que intervienen en las decisiones de este país los poderes fácticos y no interviene la representación popular.

Con todo ello no decimos no a la ordenación del sector público y más a la de este aspecto del sector público, al contrario, como ya logramos que constara en los Pactos de la Moncloa, somos partidarios de un Estatuto de la empresa pública, promesa reiteradamente concedida por el Gobierno cada vez que lo hemos pedido y reiteradamente incumplida por parte del Gobierno, y de una reorganización del conjunto de las empresas públicas. Somos partidarios de una definición explícita, clara y neta del papel del INI en la nueva coyuntura histórica y del papel del conjunto de las empresas públicas. Somos partidarios, como también apareció en los Pactos de la Moncloa y se reiteró en el debate del Plan Energético Nacional, de la idea del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Pero en estas circunstancias el INH aparece como un instrumento de desmantelamiento del Instituto Nacional de Industria y de privatización progresiva de CAMPSA. El INI se transforma en pariente pobre e insolvente. ¿Cómo va a

poder jugar entonces el INI un papel eficaz en la necesaria política de reindustrialización?

Con respecto a esto cabría señalar, al hilo de lo que ha expuesto el señor Ministro anteriormente, que en estos momentos separar política de reconversión industrial y política energética en un momento en que los dos temas están tan estrechamente ligados, nos parece, cuando menos, discutible.

Algunas voces de la patronal insisten en que el mejor INI es el INI muerto. Otras dicen que el mejor Estatuto de la Empresa Pública es la Ley de Sociedades Anónimas. El Gobierno, mientras tanto, crea un Instituto Nacional de Hidrocarburos con un Consejo de Administración que va a elegir y a intervenir en él al margen del Parlamento, puesto que menos aún vamos a discutir el reglamento del INH que el Real Decreto-ley de su fundación.

Nosotros no tenemos por qué intervenir en el detalle de todas las acciones del Gobierno, pero es evidente que si nosotros discutiéramos un Estatuto de la Empresa Pública en el que los nombramientos de los Consejeros, en el que el funcionamiento de las empresas públicas, en el que los criterios generales estuviesen claramente definidos, no tendríamos inconveniente en que luego hubiese un reglamento del INH que lo que desarrollara fuese la aplicación de estos criterios ampliamente discutidos. Y mientras continúa, por debajo de la persistencia de la Delegación del Gobierno en CAMPSA y por parte de lo que aparece en la opinión pública, uno de los problemas que nos han hecho insistir siempre alrededor del tema del Estatuto de la Empresa Pública, que es la guerra entre los altos Cuerpos de la Administración del Estado. Y no lo decimos nosotros; es un tema que está en la calle y manifestado reiteradamente.

Nosotros querríamos que, como mínimo, para un tema de esta importancia se hubiesen tenido en cuenta criterios como los británicos, que están expuestos en el libro blanco de 1978, de cara a que en los nombramientos hubiese intervención no solamente del Gobierno sino del Parlamento, de los propios funcionarios, de los consumidores y de los sindicatos; y que las sociedades no fuesen dependientes exclusivamente del Gobierno, sino que fuesen ellas mismas contempladas como servidoras del Estado y no como dependientes del Gobierno en sí.

La creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos plantea, además, el tema de que con un

Plan Energético Nacional fracasado y sin claras orientaciones, sin un plan público del sector energético coherente y discutido, quedan fuera del organismo tanto el carbón (CARBOE, HUNOSA, etcétera) como la electricidad (ENER, ENDESA, etcétera, que son públicas).

Se hubiera podido estudiar la creación de un Instituto Nacional de la Energía o, en todo caso, junto con la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos, era imprescindible reordenar, en conjunto, la actividad de las empresas energéticas públicas.

Una razón adicional procede del hecho de que las principales empresas internacionales de hidrocarburos intensifican hoy día sus inversiones en energía.

El Real Decreto-ley contiene con respecto a CAMPSA medidas tendentes a su desmantelamiento —que no tiene sentido que figuren en la norma de creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos—, con la excusa de la aproximación a la normativa comunitaria sobre monopolios con ello puede producirse una indefensión ante las multinacionales, que es uno de los rasgos —la ausencia de multinacionales— que curiosamente ha utilizado el Ministro para definir la situación española, cuando precisamente en el contexto de la crisis energética es imprescindible el contrapeso de la capacidad negociadora del sector público, la actuación del Estado ante fuerzas tan potentes cuyo tamaño económico supera al de muchos Estados.

Por todo ello, nosotros nos vamos a oponer a la convalidación del Decreto-ley.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Señor Presidente, señorías, dice la vigente Constitución española que en los decretos-leyes lo que habrá que apreciar fundamentalmente es su urgencia. Desde luego, este Decreto-ley no se puede decir que sea urgente, porque es un tema que lleva discutiéndose en España hace más de diez años, como se recordó oportunamente al debatir el PEN. También se ha reconocido expresamente por parte del Ministro de Industria que esto estaba en los Pactos de la Moncloa y que posteriormente sobre este tema se han dado muchas vueltas. Pero hay que hacer constar que si no queremos endosar la

reponsabilidad a diez años vista, por lo menos desde hace cinco años el tema está pendiente porque hay, en primer lugar, una multiplicidad de intereses públicos mal ordenados en España que es muy importante y, en segundo lugar, porque la batalla que plantea este Decreto-ley ha sido una batalla muy importante, desde el punto de vista político, entre lo que se pueden denominar las autonomías verticales en España, que son las autonomías de los intereses controlados por los grandes Cuerpos de la Administración. Se ha tardado diez años en poner de acuerdo al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Industria, a los Cuerpos respectivos que controlan las grandes empresas en ambos Ministerios. Por lo tanto, el argumento de la urgencia, que yo no he creído intuir en las palabras del señor Ministro, no es el argumento más serio.

¿Qué pensamos nosotros del Instituto Nacional de Hidrocarburos? Mi compañero el señor Triguñer ha avanzado ya un criterio inicial, y es que ya era hora de que se planteara el problema. En este sentido, en la medida en que el Gobierno (aunque sea de una manera absolutamente incorrecta con la Cámara no dándonos ningún dato ni aportando elementos) ha traído este Decreto-ley, creemos que ha dado un primer paso. Pero estimamos que este primer paso es realmente insuficiente y creemos que esta norma y este primer ensayo como muestra de voluntad es muy susceptible de mejora y modificación. En primer lugar, porque aquí se ha planteado ya la cuestión en reiteradas ocasiones de que nosotros creemos que el Instituto Nacional de Hidrocarburos, quizá mejor la Vicepresidencia de Energía, debería de estar dentro del INI, y esto no lo digo porque haya sido una postura socialista reiterada tanto en los programas electorales como incluso en el último debate de la moción de investidura, sino porque es algo que hoy en día es aceptado por muchos que no son socialistas. Cualquiera que lleve tiempo en esta Cámara sabe que el actual presidente del INI no es nada sospechoso de simpatía hacia nuestras posturas en la Cámara, y el actual presidente del INI, en recientes declaraciones, esta semana, a la Revista «Cambio 16» y también a la revista «Mercado», insiste en que cuando él era Ministro de Industria se planteó el agrupar esto en torno a ENPETROL y, además, que él considera, o consideraba entonces, que esto debía formar parte del INI.

En estos momentos yo entiendo que su opinión

puede estar sesgada por el hecho de que se le ha ido la parte más interesante, la niña de los ojos del INI desde el punto de vista financiero, pero lo que sí es cierto es que, como criterio político general, era un punto de vista compartido ya desde antes y que no se ha dado ninguna explicación de por qué ha existido esa segregación. Y este es un tema importante porque aquí se ha dicho por parte del Ministro que cuando se creó la CAMPSA en el año 1927, que es el eje central de la intervención pública en el sector petrolero, en este país lo que se planteaba era un tema de monopolio fiscal, y supongo que algún señor Ministro e incluso el Presidente del Gobierno lo sabrán.

Cuando se planteó el tema de la creación de CAMPSA no se planteaba sólo un tema de monopolio fiscal, sino que se planteaba un tema de defensa del Estado, en relación con algo que ya Sánchez de Toca —y cita don José Calvo Sotelo en «Mis servicios al Estado»— se había planteado en el año 1917, y es que existía un monopolio de hecho a nivel internacional, y lo que se planteó fue la iniciación de una defensa frente a este monopolio de hecho no por parte de las «siete hermanas», pero sí de las grandes compañías multinacionales, las tres que en aquel momento se repartían el mercado español. Es decir que no había sólo criterios de monopolio fiscal, sino que se planteaba precisamente ese proyecto de integración vertical que nosotros creemos que es importante. Esto, además, se puso de manifiesto también durante la II República cuando mi compañero de partido don Indalecio Prieto precisamente se manifestó en contra de la privatización de la CAMPSA en unos términos parecidos a los manifestados en un principio socialista, y es que a nosotros nos parecía fundamental desde este punto de vista que los intereses públicos estuvieran defendidos y existiera el instrumento de la socialización, y este es un criterio que nosotros seguimos manteniendo en este terreno. Pero desde entonces ha llovido mucho y han pasado también cosas importantes; una de ellas es que en estos momentos el mercado del petróleo a nivel mundial ha cambiado y eso ha dado mucha más importancia a todo el aspecto estratégico que supone la negociación y el control por el Estado, a nivel público, de un sector como el petrolero; y bien lo saben los que tienen que comprar petróleo para España, que cuando hablamos con los países miembros de la OPEP la existencia de este

espacio estratégico es un elemento fundamental y hay que fortalecerlo.

Desde este punto de vista nosotros creemos que este es un tema que no se ha discutido, creemos que es un tema que se debe discutir y reconsiderar y, además, entendemos, por el criterio que ha manifestado también mi compañero el señor Triguier, que es un tema importante, y es que tenemos que tratar de comprender, incluso de imitar, la racionalidad de las grandes multinacionales cuando plantean no el tema petrolífero en exclusiva, sino el tema energético en toda su dimensión. Este es un tema enormemente importante. La política energética hoy en día no se puede limitar a una política que venga dominada por la industrialización y exportación de hidrocarburos líquidos; hay que tener en cuenta que hay muchos elementos más dentro de los hidrocarburos, como el gas natural, y luego también hay que tener en cuenta la planificación... Efectivamente, señor Ministro, luego hablaremos del tema del gas natural. Hay que tener en cuenta también que en este terreno hay que considerar las variables sustitutivas, del petróleo desde el punto de vista económico y energético. De esto no se nos dice nada, y entendemos que el sector público debería actuar con una coherencia de conjunto. Esta es una primera cuestión que nos preocupa y creemos que se debe considerar seriamente y con más profundidad.

La segunda cuestión fundamental es la que hace referencia a la unidad de dirección y también al criterio democrático que debe presidir el control de las empresas públicas. Aquí estamos en una situación en la que es bueno recordar los Pactos de la Moncloa, que se han traído a colación para explicar la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos; allí estaba el Estatuto de la empresa pública, que no se ha traído hasta el día de hoy, y este no es un caballo de batalla que estemos dando o aprovechando la oposición para molestar al Gobierno, es que hay temas importantes. No existe hasta este momento (yo diría que en este Parlamento solamente ha habido algunos presidentes de empresas públicas que han comparecido en la Comisión de Industria, pero sobre todo en la de Presupuestos, cuando se trataba de aumentar dotaciones porque eran insuficientes), no ha habido una relación seria con la empresa pública. Y es todavía más. En estos momentos en la empresa pública —y bien lo sabe el Gobierno, y el Partido Socialista tiene conoci-

miento de ello— existe en su dirección todavía una parte importante de personas que estaban antes del 15 de julio de 1977, y yo estoy seguro de que en la noche del 23 de febrero hubo algunos de ellos que desearon que hubiera un cambio de rumbo en este país. Y es de pensar incluso que en algunos casos habría que estudiar seriamente si se han utilizado debidamente los caudales públicos que deben administrar.

El hecho es que en este momento lo que se ha conseguido en principio con el Instituto Nacional de Hidrocarburos no es dar una unidad de criterio a la política del Gobierno; esto no nos lo ha explicado el Gobierno todavía. Yo me atrevería a decir que lo que en este momento se ha conseguido está reflejado en los artículos 11 y 12 del texto del Decreto-ley, que lo que se ha conseguido es el gobierno de coalición entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda, pero no se ha llegado todavía hasta el final de la cuestión, pues quedan muchas sombras y muchos puntos que precisar en relación a cómo se va a dirigir la política petrolífera en este país. Y este es un tema importante, porque nosotros creemos que debería haber una claridad mucho mayor del Gobierno en cuanto a la estructuración del Instituto Nacional de Hidrocarburos dentro de un contexto general.

En segundo lugar, porque sigue planteado con toda su vigencia el problema de las relaciones que deben existir entre la empresa pública y el Parlamento. No se trata solamente de que aquí venga con mayor o menor agrado el presidente de una empresa nacional o de un instituto cuando nosotros reclamamos tres o cuatro veces que vengan. Entendemos que los planes de una cuestión tan esencial para un sistema democrático como es la energía deben plantearse ante el Parlamento y ante la opinión pública y que debe existir un sentido de la reponsabilidad, y eso hoy en día no se trasluce en esta casa, y creemos que es enormemente importante que con esta ocasión vuelva a surgir un tema que pone de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno de adaptar las empresas públicas a una situación democrática. Este es un segundo aspecto enormemente importante que se refiere a la política y a la estructura, y entendemos que debe ser tratado con más consideración.

Hay un tercer aspecto que nos preocupa enormemente y lo tenemos que señalar: es el tema de algunas lagunas, de insuficiencias importantes.

Ha avanzado el señor Ministro un criterio que se maneja mucho en términos económicos, aunque hoy en día la situación de algunos monstruos industriales en el mundo lo ponga en cuestión, aunque no de una manera absoluta; dice que es precisa la integración vertical. ¿Por qué? Porque la integración vertical produce economía de escalas. Bien, estamos de acuerdo con esto. Pero lo que no entendemos es por qué el criterio de la integración vertical no se ha manifestado en toda su dimensión, porque, desde luego, no conozco en este momento a ninguna empresa importante de petróleo en el mundo que corte la integración vertical en un terreno tan importante como es el de la distribución.

Realmente, uno de los puntos más desafortunados y, desde luego, condenables e imprecisos, desde el punto de vista de técnica legislativa, es el que se refiere al artículo 4.º, letra e), del decreto, que dice literalmente: «La propiedad y derechos del Estado afectados al monopolio de petróleo que no formen parte, procedan ni vayan a ser destinados al sistema de distribución».

Aquí hay un primer problema y es definir legislativamente qué es el sistema de distribución. Pero, en segundo lugar, lo que se nos viene a decir aquí es que existe un cierto cajón de sastre con todo lo que es el sistema de distribución. Esto plantea muchos problemas políticos y de fondo. En primer lugar, un problema al que tiene que ser especialmente sensible esta Cámara, y es que dentro de esa maravilla jurídica que es la CAMP-SA (que se trata de una sociedad que arrienda un monopolio fiscal y que es una sociedad de Derecho privado, pero que está controlada mayoritariamente por el Estado, y tiene un delegado del Gobierno, que es una figura absolutamente única en el campo de la empresa pública mundial, parece ser) resulta que tenemos unas valoraciones determinadas. Yo tengo aquí la Memoria de 1979, que en la página 71 habla del resumen general con el Estado y en donde se contiene el inmovilizado y la financiación ajena destinada a fines del monopolio; inmovilizado que en principio es o forma parte del Patrimonio del Estado que está valorado, el inmovilizado material, en 39.800 millones de pesetas. Aquí el problema que se plantea es que, evidentemente, y siguiendo las normas vigentes en el terreno de valoración que emplea el Patrimonio del Estado, se trata de valoraciones históricas y no son las valoraciones de los precios de mercado de estos bienes, y sería

muy importante que en vez de enviarnos este apartado de este artículo nos encontráramos con una valoración actualizada, que es de suponer —se han avanzado cifras— oscilaría entre los 300 ó 400 millones de pesetas, aparte de lo que podría suponer, incluso en España, desde el punto de vista del inmovilizado y de urbanismo. Pero, en fin, este es un tema clave para nosotros: en primer lugar, saber cuánto vale eso; en segundo lugar, saber también qué es lo que se va a hacer con esto, porque aquí sólo existe un criterio negativo.

Nosotros entendemos, y lo decimos claramente, que este es un patrimonio acumulado desde el punto de vista público que debe utilizarse como un bien público. Consideramos que el tema del monopolio fiscal no es un tema a discutir en este momento. El Gobierno, que es quien tiene en estos momentos la clave de la política de negociación, incluso con la Comunidad, debe fijarlo en el futuro. Pero lo que es evidente es que entremos o no en la comunidad, se acabe o no con el monopolio desde el punto de vista fiscal, lo que sí es evidente es que hay que distribuir, y es claro que una base estratégica para distribuir es toda la red de distribución primaria: oleoductos, gasoductos, barcos, camiones, todo lo que sea necesario.

Entonces aquí creemos que debe de tratarse de una cuestión que se plantea desde el punto de vista estratégico en el sector público, y no entendemos esta timidez extraña que existe a la hora de abordar este problema, y tengo que manifestar que nuestra preocupación aumenta cuando vemos lo que está ocurriendo con la red de distribución secundaria de gas natural. En España se está privatizando de una manera que los socialistas entendemos que es inaceptable.

En este sentido, nosotros, aparte de la imprecisión técnica que se contiene en el decreto-ley, realmente tenemos que decir que no nos fiamos de lo que pueda hacer el Gobierno en el futuro. Si hace lo que está intentando hacer en estos momentos con la distribución del gas natural, lo que nos tememos mucho es que privatice sistemáticamente esto o, lo que es peor, que aplique el axioma de que lo que hay en España es de los españoles y ponga al servicio de las empresas petroleras privadas esta red de distribución a cambio de un canon.

Se ha hablado de pactos anteriores a la aparición de este decreto-ley con los petroleros privados. Entendemos que con la redacción actual que tiene, caben todas las sospechas en torno a lo que

pueda haber ocurrido ahí. Estimamos que no se debe de dar la menor posibilidad de desprivatización o incluso de liquidación de un aspecto que entendemos que es absolutamente estratégico desde el punto de vista no sólo de la planificación petrolífera, sino también de la defensa de los intereses públicos en este sector que nosotros consideramos esencial. No quiero decir con ello que nos vayamos a oponer a que los privados inviertan y hagan su esfuerzo, pero que lo hagan por su cuenta. Además, aquí hay un problema importante, y es que está empezando a avanzar en ese terreno una curiosa teoría de neutralidad de las propiedades del Estado que nosotros no compartimos, porque si se considera que estos bienes son neutrales con respecto a las compañías petroleras privadas españolas, lo que puede ocurrir es que estas compañías, en cualquier momento, en algún caso —y esto depende de lo que son las leyes de comercio—, pasen a ser propiedad de una compañía multinacional, con lo cual nos encontraríamos en una situación en que bienes del sector público podrían estar controlados por empresas que no son españolas.

Creo que es importante también recordar que cuando se creó el Monopolio de Petróleos, cuando se creó la CAMPSA —y esto también es una cita de las Memorias de don José Calvo-Sotelo—, hubo un personaje muy importante, el «napoleón» del petróleo, el señor Deterding, que era presidente de la compañía holandesa Shell, que se presentó en Madrid, y cuando planteó el problema, en líneas parecidas a éstas, del abastecimiento, se encontró con que, más o menos, se le dio un portazo. Sería un poco irónico que realmente la Historia llevara a que este Gobierno fuera el que abriera el portillo para la privatización e incluso para la entrada de las multinacionales en este sector.

Por eso nosotros entendemos —y he señalado solamente los aspectos esenciales de nuestras objeciones— que este primer paso, que ha demostrado y que demuestra una tímida valentía del Gobierno a la hora de resolver un pleito que tiene ya diez años, es algo que hay que coger y es algo que hay que aceptar, porque el Gobierno lo ha decidido así y es él el que ha escogido el terreno de juego.

Creemos que es absolutamente discutible el procedimiento del decreto-ley, porque no existe ninguna urgencia que lo justifique, y entendemos absolutamente necesaria la tramitación como

proyecto de ley, puesto que además es un criterio ampliamente mayoritario de la Cámara en este momento. ¿Por qué? Porque creemos que es muy importante que estas cuestiones, que afectan al patrimonio público de nuestro país y al futuro del sector público, sean discutidas con la máxima claridad, con la máxima cantidad de luz y taquígrafos; que el Gobierno nos aporte todos los elementos de juicio y documentación, entre ellos los elementos de valoración que son necesarios para conocer el tema y, sobre todo, que podamos discutir estos temas no como un proyecto de ley que se acepta porque no cabe otra cosa y luego se aplica la facultad legislativa, sino como proyecto de ley que dé las suficientes garantías legales para que podamos disponer de algo que es absolutamente esencial como instrumento estratégico de nuestro país, que es un gran sector público en el terreno petrolero.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, noticias confirmadas señalan que, en la tarde hoy, el Papa Juan Pablo II ha sido herido por un disparo, en la plaza de San Pedro, aproximadamente a las cinco y veinte; está internado y no hay noticias fidedignas, al menos no las tiene la Presidencia, respecto de cuál sea su real estado.

Yo creo que en estos momentos puedo interpretar el sentir de la Cámara expresando los deseos de todos por su pronta recuperación; expresar, una vez más, nuestra consternación por esa oleada de violencia que asola el mundo y que produce hechos tan graves de esta naturaleza que llegan incluso a afectar a quien, para muchos, creyentes o no, simboliza hoy en el mundo el ejemplo noble de una entrega por una fe, por unas creencias, por unas convicciones.

Por el Grupo Parlamentario Centrista tiene la palabra el señor Martín Oviedo.

El señor MARTÍN OVIEDO: Señor Presidente, señoras y señores diputados, bajo la impresión que al Grupo Centrista, como a toda la Cámara, estoy seguro que le ha producido la noticia que el Presidente acaba de darnos, intervengo en este acto no sin decir que el Grupo Centrista se suma expresamente a las palabras del Presidente de esta Cámara, a sus preocupaciones, y expresa igualmente los deseos de una pronta recuperación de una figura cuya importancia mundial todos reconocemos y que, por otra parte, demuestra

que los hechos terroristas tienen un alcance y un significado que pone muchas veces en cuestión nuestra propia civilización.

El Grupo Parlamentario Centrista manifiesta, con respecto al debate que estamos celebrando sobre la convalidación del Real Decreto-ley 8/1981 que crea el Instituto Nacional de Hidrocarburos, su firme propósito y su convicción, que yo trataré de razonar, en favor de la convalidación de este real decreto-ley, por los extremos y por las razones que voy a tratar de detallar muy brevemente.

Se ha dicho en la presentación por parte del Gobierno, y se ha reconocido también por los diversos grupos que han intervenido, que esta era una vieja aspiración, que esta era ya una propuesta que había nacido a lo largo de los múltiples debates que con motivo de la política energética hemos celebrado en este Parlamento y en esta Cámara en concreto. Efectivamente, repasando algunos antecedentes consabidos, repasándolos también con brevedad, podemos comprobar cómo en los Pactos de la Moncloa, en octubre de 1977, se estableció, entre los diversos partidos políticos con representación parlamentaria, la necesidad de coordinar las competencias administrativas en el subsector de hidrocarburos y se decía textualmente: «En lo posible, creación de un organismo que agrupe todas las participaciones públicas en el subsector».

Meses después, en la presentación del Plan Energético Nacional, tanto en el Pleno en dos ocasiones, puesto que entre tanto intervino la disolución de las Cámaras, como en el amplio debate que durante dos largos meses ocupó a la Comisión de Industria y Energía de esta Cámara, se repitió de un modo constante por todos los grupos la necesidad del principio de coordinación a que me he referido y también la conveniencia de, en el momento adecuado, llegar a la creación de un organismo que centralizase, organizase y estableciese de un modo coherente las participaciones y la política en el sector de hidrocarburos.

En ese sentido, en las resoluciones que se hicieron por los distintos grupos para debate en la Comisión y después en este Pleno, hubo propuestas prácticamente coincidentes en cuanto al fondo y en cuanto a los principios por parte de todos los grupos, en el sentido de que procedía la creación de un Instituto Nacional de Hidrocarburos o con otra denominación similar, pero con los objetivos y principios comunes a los que antes me refería.

Concretamente, yo quisiera recordar cómo el Grupo Parlamentario Centrista, insisto, coincidiendo con las propuestas de otros grupos, propuso en su resolución, que fue la aprobada mayoritariamente por esta Cámara, «la intensificación del grado de coordinación de las empresas refinadoras participadas por el Estado, de forma que tan pronto como sea posible esta coordinación se concentre en un solo organismo». Esa ha sido, como digo, la tónica que se ha seguido a lo largo de estos meses, incluso años, de discusiones, a través de la cual esta Cámara ha podido participar —me atrevería a decir que como en pocos temas— en la política energética, en la discusión de los grandes principios, de las grandes opciones de la política energética.

Ha sido el actual Gobierno el que anunció de un modo textual, de un modo concreto y preciso la creación de ese Instituto Nacional de Hidrocarburos. Así se contenía en el discurso de investidura presentado por el actual Presidente del Gobierno. En él se decía expresamente, y cito también de modo textual del «Diario de Sesiones», que «es necesario contar con los medios precisos para que la acción estatal del sector de hidrocarburos asegure la política de abastecimiento y se aprovechen de una manera más racional todas las posibilidades del Estado», añadiendo que para ello era necesaria la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos «que agrupe —vuelvo a citar textualmente— todos los bienes y las participaciones del Estado en este sector».

Pues bien, señorías, a estos principios, a estos propósitos, reiteradamente manifestados por esta Cámara y también por el Gobierno, responde el real decreto-ley que hoy nos ocupa. Su artículo 1.º crea, como se nos ha dicho y como es conocido por la Cámara, el Instituto Nacional de Hidrocarburos como entidad de Derecho público sometida o, más bien, diría yo, beneficiada de un régimen de Derecho privado de actividad mercantil que le da la debida actividad, pero dentro de un concepto de Derecho público y de ente de Derecho público que salvaguarde en todo caso no sólo la soberanía, sino la propia capacidad de gestión del Estado respecto de las empresas públicas.

El artículo 2.º de este Decreto-ley establece, de una forma sumaria, pero de una forma clara, a nuestro modo de ver, los objetivos que debe cumplir este Instituto. Objetivos que, no viene mal recordarlos, de acuerdo con las directrices del Gobierno, han de consistir en las actividades empre-

sariales del sector público en el área de los hidrocarburos, correspondiendo también al Instituto toda iniciativa empresarial que el sector público promueva en este campo. Por tanto, acotación de toda la actividad en el terreno de hidrocarburos, tanto de la existente como de las iniciativas futuras que el Estado pretenda establecer en un plan a largo plazo.

Los artículos fundamentales que se refieren a la estructura administrativa del propio Instituto podría decirse que son tres. De una parte, el artículo 5.º, en el cual se adscribe este Instituto, por exigencias de la propia ley (digo por exigencias en el sentido de que todo ente público debe estar adscrito a un Departamento ministerial, sin que eso reste su propia autonomía); se adscribe, digo, según el artículo 5.º, el Instituto Nacional de Hidrocarburos al Ministerio de Industria en una asignación coherente de las funciones administrativas a nivel departamental. Mientras que —y este es el complemento— los artículos 11 y 12 detallan las competencias que en cuanto al Gobierno deben ejercer, según los temas y las materias, el Ministerio de Hacienda y el propio Ministerio de Industria y Energía.

En este punto yo quisiera hacer alguna consideración, puesto que estamos hablando de una atribución de competencias al Estado, y una breve consideración sobre algunas reflexiones o argumentos que han sido expuestos sobre la posible interferencia en las competencias de las Comunidades Autónomas o interferencia, incluso, en los propios Estatutos de Autonomía. Creo, señorías, que éste es un punto que no tiene planteamiento en el ámbito de este decreto-ley, y no tiene planteamiento puesto que no está interferido, en absoluto, el juego de los Estatutos de Autonomía y de las competencias de las Comunidades Autónomas, porque hay un principio de organización de las empresas públicas de los organismos del Estado y eso no empece, ni evita, ni puede, por supuesto, obligar a que ciertas competencias, las que están reconocidas, sean ejercidas en la forma que corresponda. Por consiguiente, son razonamientos que entendemos desde una óptica de partido, pero que no compartimos. Nos parece, al menos, exagerado decir que con ello se está siguiendo una política diversa en el sentido de que organismos como éste, que verosíblemente producirán beneficios, han de ser para el Estado, y que otras actividades o problemas que pueden producir o que están produciendo pérdidas, han

de ser con la participación de las Comunidades Autónomas. Nos parece, simplemente, dicho en estos términos, que es una discusión fuera absolutamente del contexto de este Decreto-ley y de esta problemática.

Punto básico del decreto-ley es la agrupación de las empresas del sector de hidrocarburos, empresas del Estado o participadas por el Estado; por tanto, de la participación que al Estado corresponde en dichas empresas. Las detallan los artículos 3.º y 4.º del decreto-ley. No voy a entrar en su enumeración, pues son sobradamente conocidas y constan en el propio decreto-ley. Insistiré, una vez más, en que, de esta forma, tanto las empresas actuales como las que puedan crearse en el futuro en el sector de hidrocarburos por el Estado, estarán agrupadas de esta forma orgánica y centralizada —dicho sea en los términos más rigurosos de la expresión— dentro de este Instituto que ahora se crea.

Los artículos 6.º al 9.º tienen una gran importancia, a mi modo de ver y desde el punto de vista del Grupo Centrista. Son los que fijan la organización, los grandes principios. Un decreto-ley es, en definitiva, una norma de rango legal, que tendrá que tener su propio desarrollo reglamentario, pero los grandes principios de organización y de funcionamiento, como también los órganos del propio Instituto, están previstos en el decreto-ley a través de un Estatuto que nos parece claro y definido, repito e insisto, sin que ello prive a una consideración posterior o de un desarrollo posterior por normas, lógicamente, de rango reglamentario.

Finalmente, por lo que hace al Monopolio de petróleos, me interesa subrayar que el artículo 10 declara expresamente su subsistencia. También quisiera decir en este extremo que todo tipo de consideraciones sobre el futuro del monopolio, sobre la problemática del mismo, e incluso sobre la problemática y sustantividad de Campsa en cuanto a actividades que el decreto-ley mantiene dentro de Campsa, están también fuera de la problemática de este decreto-ley. No es que no sean temas interesantes, que puedan y deban tratarse, pero no están prejuzgados ni recortados ni afectados por este decreto-ley. Simplemente, el artículo 13 dice que las actividades de Campsa en relación con el Estado, no otras posibles actividades, quedan limitadas a las que establece el artículo 10. Y en esos términos se puede hablar de una cierta reorganización de Campsa, pero no llevando más

allá los argumentos, como ha sido hecho en algunas intervenciones anteriores.

Con esta sumaria explicación del decreto-ley creo que queda justificada, a juicio de mi grupo, la procedencia de convalidar el mismo, sin que ello obste, como el propio grupo ha puesto de manifiesto, a su tramitación más reposada por la vía del proyecto de ley, pero conservando —eso sí quiere sentarlo claramente el grupo— los puntos básicos que nos parecen totalmente concordantes con la política energética seguida por el Gobierno y con la política que, a propuesta del Grupo Centrista, ha sido aprobada por esta Cámara.

Quisiera concluir añadiendo todavía dos tipos de consideraciones, fundamentalmente políticas, que vienen a corroborar y a reafirmar la posición positiva que el Grupo Centrista tiene para la convalidación de este decreto-ley. Una de ellas ha sido ya expuesta a lo largo de estas palabras. Me refiero al paso decisivo que la creación de este Instituto representa en la ordenación y unificación de toda nuestra política en una materia tan importante, dentro del conjunto de la política energética, como es el sector de los hidrocarburos.

La necesidad de una política unificada parece que no necesita de mayores comentarios, de mayores razonamientos, y hay, además, entiendo, una opinión unánime de la Cámara en este punto. La necesidad de que la política energética, de la cual la política de hidrocarburos, como es natural, constituye simplemente una parte, sea una política global y unificada no resulta, por supuesto, negada ni conocida por este decreto-ley. Esa política energética sigue siendo una responsabilidad del Gobierno englobada en la política económica y, por supuesto, esta Cámara, dentro de las funciones que le corresponden, también tiene su participación, y es evidente que la ha tenido, como antes decía, en el conjunto de las decisiones de la política energética.

La segunda razón a la que quería aludir es también una razón de carácter político y que implica, en cierto modo, una forma de concebir la política económica, en la cual seguramente mi grupo y el Gobierno al que apoya no tienen, lógicamente, las mismas concepciones que otros grupos de esta Cámara. Me refiero al equilibrio, que podríamos calificar de exquisito y preciso, que la norma que este decreto-ley guarda entre las acciones del sector público y del privado. El decreto-ley, que hace referencia en la exposición de motivos a esta

concepción de la actividad privada y su respeto a la misma (sin que ello nos pueda llevar a otro tipo de conclusiones o juicios de intenciones, como en algunas exposiciones hemos visto), no incrementa la participación ni consagra la injerencia del sector público en el privado. Simplemente se limita a potenciar y racionalizar la actuación del sector público mediante su unificación. Aquí hemos podido escuchar, en alguna intervención anterior, opiniones contrarias, distintas, que van por los dos polos opuestos. Esto es lo que nos hace ratificarnos más en que una posición como la que adopta el decreto-ley es una posición conveniente, lógica y, desde luego, coherente con la política económica mantenida.

Por consiguiente, y en función de estas razones, el Grupo Parlamentario Centrista se propone votar favorablemente la convalidación de este decreto-ley, pero no obstará y, además, sumará su voto, a la tramitación como proyecto de ley, y así se permite solicitarlo de los demás grupos de la Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

Se somete a decisión de la Cámara la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/1981, de 24 de abril, de creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Votar «sí» es votar por la convalidación, y votar «no», es votar por la derogación.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 284 votos emitidos; 252 favorables; 29 negativos; tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley 8/1981, de 24 de abril, de creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos.

¿Solicita algún grupo parlamentario que se someta a decisión de la Cámara su tramitación como proyecto de ley? *(Pausa.)* A petición de varios grupos parlamentarios, se somete ahora a decisión de la Cámara si procede la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley ya convalidado.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 282 votos emitidos; 281 favorables; una abstención.

El señor PRESIDENTE: El Real Decreto-ley 8/1981, de 24 de abril, será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, conforme al artículo 86 de la Constitución.

Se suspende la sesión por veinte minutos.

Se reanuda la sesión.

TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

— SOBRE INFORMES PREVIOS DE FINCAS MANIFIESTAMENTE MEJORABLES

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre informes previos de fincas manifiestamente mejorables. El texto de esta proposición de ley aparece publicado en el «Boletín Oficial de la Cortes Generales» correspondiente al día 30 de octubre de 1980.

Daremos por leído el texto de la proposición si ningún grupo parlamentario solicita que se dé lectura. (*Pausa.*) Se da por leído.

Por el Secretario de la Cámara se va a dar ahora lectura al escrito en el que el Gobierno manifiesta su criterio respecto de la toma en consideración y al acuerdo que sobre la toma en consideración ha adoptado, asimismo, la Comisión de Agricultura.

El señor SECRETARIO (Torres Boursault): Dice así:

«Excelentísimo señor: De acuerdo con lo establecido en el artículo 92.4 del Reglamento provisional del Congreso, tengo la honra de enviar a V. E. el criterio del Gobierno respecto a la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado ante esa Cámara el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre informes previos de fincas manifiestamente mejorables, y cuyo contenido es el siguiente:

“1.º Los estudios que, de acuerdo con el artículo 5.º de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables debe realizar la Administración para determinar si una finca puede estar incluida en su artículo 2.º y, por consiguiente, si procede requerir a los interesados para que presenten un Plan de explotación y mejora, pueden iniciarse mediante un informe previo de cada finca denunciada o que se investiga de oficio, con el fin de conocer en una primera apreciación, si existen razo-

nes suficientes que aconsejen la iniciación del correspondiente expediente de finca manifiestamente mejorable.”

Pero en gran número de casos, un simple informe previo no resulta suficiente para iniciar el expediente de finca manifiestamente mejorable, por lo que se requiere su ampliación con datos complementarios.

Iniciado el expediente de una finca, normalmente debe realizarse un estudio agronómico sobre la misma a fin de establecer, en su caso, las líneas directrices a las que ha de ajustarse el Plan de explotación y mejora. Conocidas estas directrices y aprobadas por el IRYDA, corresponde efectuar el requerimiento individual a que hace referencia el artículo 5.1 de la ley.

En todo este proceso se precisa un tiempo que es variable para cada finca, según la extensión, complejidad de explotación, mejoras a realizar, etcétera, y en función también del número de expedientes que en un momento determinado se encuentren en marcha en la jefatura correspondiente del IRYDA.

2.º A mayor abundamiento, en la proposición de ley presentada se trata de fijar un plazo a la Administración para la realización de uno de los trámites previstos en la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables: el requerimiento a los propietarios. Por tanto, esta proposición de ley no genera directamente aumento de gasto público; sin embargo, al obligar a la Administración a actuar en un plazo determinado, se impide a ésta que pueda dilatar las actuaciones y ajustarlas a sus disponibilidades, lo que de manera indirecta puede incidir en el gasto público, en la medida en que las actuaciones no estuviesen previstas en el presupuesto del Ministerio de Agricultura.

3.º Por todo lo indicado, el Gobierno estima que no se puede aplicar a este proceso un automatismo uniforme para todos los expedientes y, por consiguiente, su criterio es contrario a que se tome en consideración la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso.” Dios guarde a V. E. Madrid, 3 de noviembre de 1980. El Ministro de la Presidencia.»

Dictamen de la Comisión de Agricultura:

«La Comisión de Agricultura, en reunión celebrada el 12 de marzo de 1981, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.4 del Reglamento Provisional del Congreso de los Diputados, ha manifestado por 14 votos en contra, 10 a favor y ninguna abstención, su criterio contrario

a la toma en consideración de la proposición de ley relativa a informes previos de fincas manifiestamente mejorables, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Palacio del Congreso de los Diputados, a 12 de marzo de 1981.- El Presidente de la Comisión de Agricultura.»

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario proponente y para exponer los fundamentos de su iniciativa, tiene la palabra el señor Calahorro.

El señor CALAHORRO TELLEZ: Señor Presidente, señorías, la proposición de ley que hoy presentamos para su toma en consideración en Pleno, básicamente consiste en establecer un plazo de dos meses desde que se establece la iniciación de un expediente en la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables hasta el requerimiento individual.

Los plazos tasados por la ley parten, desde el principio, del requerimiento individual con un plazo de dos meses para la presentación del plan de explotación y mejora; este plazo es prorrogable por otros dos meses y, si no es aceptado por el particular, presenta ante la Administración, en otro plazo de dos meses, el plan de explotación y mejora. Después ya vienen los trámites para si hay avenencia o no la hay. En caso de que no la hubiera queda expedita la vía de expropiación de uso que se establece en el artículo 6.º

En definitiva lo que ocurre —y querría fijar aquí la atención de SS.SS.— es que hay una especie de colisión entre lo que es la iniciación del expediente y lo que, legalmente, en la Ley de fincas Manifiestamente Mejorables se considera que es la iniciación de los plazos y de los trámites, que es con el requerimiento individual.

Aquí hay una laguna legal que es, básicamente, lo que nosotros pretendemos llenar. Ocurre que la no existencia de plazo desde que se inicia el expediente hasta el requerimiento individual puede producir bastantes perturbaciones. Lo pedimos no sólo en el sentido estricto de la aplicación de la Ley, sino que lo pedimos también por razones de seguridad jurídica. No decimos que vaya a pasar, pero en expedientes iniciados de oficio o por denuncia —que son las dos posibilidades— hasta que llegue el requerimiento individual, al no haber plazos tasados para la Administración en algunos casos se pueden dilatar determinadas actuaciones sin ninguna explicación por parte de la

Administración. No decimos que esto vaya a pasar o que esté pasando, sino que puede pasar. Pero hay un caso de inseguridad jurídica bastante claro. Supongan, por ejemplo, el caso de una resolución motivada para el expediente de alguna finca, que se ha iniciado, y hay un plazo para requerirlos para la presentación del plan de explotación y mejora; pero hay otra finca que pudiendo estar en esas condiciones, que habiendo estado denunciada o que haya empezado sobre ella el expediente de oficio, puede ocurrir también en este caso que una haya sufrido requerimiento individual y otra no, por lo cual se da un caso de inseguridad jurídica beneficiando a unos en contra de otros. Esto puede pasar.

Hay otra razón, creo muy importante, que se está dando en la actualidad, ésta sí que se está dando. El argumento es que se empieza un expediente de oficio o se empieza un expediente de denuncia. Creo que en el último avance que presenta el Ministerio de Agricultura hay 886 fincas y, sin embargo, nos encontramos con que algunas fincas pueden haber sido desistidas del trámite; en algunas fincas el trámite no ha comenzado porque no estaban en el campo de aplicación de la Ley, probablemente por una actuación de oficio o denuncia que realmente no se incluye en la Ley y a los titulares de estas fincas no se les ha comunicado que efectivamente no están en el plazo de cumplimiento de la Ley.

Entonces, hay tres argumentos básicos. Uno, porque no se puede cumplir dilatando los plazos. Hay otro segundo argumento de inseguridad jurídica, porque unos pueden ser requeridos y otros no, estando en las mismas circunstancias; y hay más casos, en el supuesto de que algunos hayan sido denunciados y, sin embargo, no se les haya comunicado que su denuncia no va a surtir efectos por no estar incluidos en el plazo de aplicación de la Ley.

Esto no son puras especulaciones ni, por supuesto, es algo que no venga avalado por la corta experiencia de aplicación. Por ejemplo, en el último avance a que antes me refería del Ministerio de Agricultura hay aproximadamente 886 fincas visitadas, de las cuales 826 están en informe previo —ahora veremos cuál es la categoría del informe previo y qué se dice sobre todo en la comunicación del Gobierno—, pero se dice que hay 146 con directrices fijas y 145 con requerimiento del plan de explotación y mejora. O sea que hay exactamente 575 que no se sabe en qué trámite

están; lo más probable es que haya algunas de ellas, algunos titulares de esas fincas que no saben en qué trámite están. No cabe la menor duda a mi Grupo de que habrá algunas que no estén en el campo de aplicación de la Ley, pero ¿qué ocurre? Que al existir la laguna de la imposibilidad de que la Administración tenga plazo de requerimiento legal para acudir a las fincas denunciadas, quiere decirse que desde que una finca se denuncia puede pasar tiempo, meses o años, en los cuales un titular no sabe si su finca va a ser objeto de trámite de fincas manifiestamente mejorables o si no va a ser objeto, si se va a requerir o no.

Esto es una laguna legal, pero que no piense nadie que esto es exclusivamente una enmienda instrumental; que no lo piense nadie. Es una enmienda instrumental que tiene un profundo contenido de cumplimiento, porque hay cosas que no se han aclarado.

La comunicación que se ha leído desde esta tribuna sobre el criterio del Gobierno no sólo no nos ha aclarado, sino que nos ha confirmado más en nuestro planteamiento porque se especifica que desde que una finca es denunciada y pasa a trámite de informe previo, resulta que, de forma general, hay que seguir determinados pasos, y fíjense SS.SS. los pasos que hay que seguir: después del informe previo hay una ampliación de datos complementarios; posteriormente viene el trámite que se llama de iniciación del expediente y después se dice que, en la mayoría de los casos, hace falta un estudio agronómico. ¿Cuánto tiempo consideran SS.SS. que puede durar un estudio agronómico? Y fíjense que todavía no estamos en los plazos tasados de la Ley que empiezan a través del quinto, del requerimiento individual. O sea, que hay informe previo; después una ampliación de datos complementarios, que puede ser objeto de bastantes controversias y puede ser un asunto que tenga bastantes dificultades (me refiero a dificultades técnicas, no hablo de otro tipo de dificultades que pueden surgir); después viene la iniciación del expediente, tampoco hay plazo en ese paso; y después viene un estudio agronómico. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo se precisa para hacer un estudio agronómico? Hay quien me puede decir que un estudio agronómico puede durar mucho tiempo o menos tiempo; depende de con qué equipo se hace. Pero todavía no hay plazo tasado.

Después viene el requerimiento individual y empiezan a cumplirse los plazos del artículo, lo

cual requiere decir que incluso la comunicación del Gobierno nos podría llevar a una vía abierta en la que se puede dejar no un plazo de dos meses, sino ampliar el plazo. Simplemente con esto no se nos dice que tenga existir un plazo, sino que puede ampliarse, y probablemente incluso de manera normal, lógica y legítima, se pudiera ampliar este plazo. Ustedes son los que van a tener el juicio.

Además otra de las razones que se especifica en el criterio del Gobierno es una razón que, por supuesto, me parece a mí que tiene una difícil presentación. Se dice que uno de los criterios o de los objetivos es que, efectivamente, se baraja que hay un proceso muy complejo. Efectivamente, puede ser todo lo complejo que se quiera o que tenga que ser, pero se añade que el número de expedientes que en un momento determinado existan o se encuentran en marcha en la Jefatura de IRY-DA, es lo que puede producir más complejidad. O sea, si hay más fincas que están en estas condiciones, quiere decirse que esto puede introducir más complejidad al proceso.

¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuanto más se trabaje, más complejidad se pone en el proceso, pero esto nos lleva también a un segundo criterio que, si el otro tenía poca presentación, pienso que hoy honradamente no tiene ninguna. Se dice que esta proposición de ley no tiene incremento de gasto público, esto lo dice el criterio del Gobierno; dice casi textualmente que no genera directamente gasto público, pero al obligar a actuar en un plazo determinado a la Administración se impide que ésta pueda dilatar sus actuaciones (me parece que esas son palabras textuales que existen en el criterio del Gobierno), con lo que indirectamente puede generar gasto público, al no ajustarse a sus disponibilidades. Dicho gráficamente, si se trabaja mucho, hay gasto público; si la Administración se ralentiza en este tema, resulta que no se produce gasto público, pero para esto no haría falta la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. En su caso, es lo que se desprende de una interpretación creo que normal, no extraordinaria del criterio del Gobierno.

Creo que aparte de ser un argumento peligroso, es un argumento que tiene honradamente poca presentación. Querría decir que esta serie de razones no es solamente que no existan plazos entre que que empiece el expediente de requerimiento individual, porque ahora, con el criterio del Gobierno, se complejiza y en lugar de existir un trá-

mite existen cinco, pero sin plazo de ningún tipo para la Administración, con la serie de inconvenientes que he tratado de sugerir aquí. Lo que ocurre es que estamos hablando de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, Ley que presentó como el primer paso de un ambicioso proyecto legislativo, pero ha sido denunciado reiteradamente desde esta tribuna que no ha sido ambicioso y que no se han ido cumpliendo los plazos que se dijeron desde el principio.

Pero es que, en segundo lugar, fue la primera en la que se hablaba de proceso de reforma, y se tuvo mucho cuidado por parte de todos los grupos de esta Cámara, y particularmente por el Grupo Socialista, en cuyo nombre estoy hablando ahora mismo, en decir que esto no era para expropiar ni para quitarle la tierra a nadie, que esto era sólo un asunto para movilizar tierra, para producir una esperanza en un sector tan deprimido como el campo español, particularmente en donde el latifundio existe, y se hizo así.

También se ha dicho desde partes muy importantes de la Administración, y desde mentores de la Administración con conocimiento del tema, que lo más importante de esta ley es la provocación de efectos inducidos. Sin embargo con estas lagunas legales que existen esta Ley tiene menos efectos inducidos. Quiero decir desde aquí que si lo que se quería con la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables era provocar efectos inducidos, que se hubiera hecho una ley muchísimo más dura, con lo cual se hubieran tenido muchos más efectos inducidos. Esta ley está corriendo actualmente el riesgo de convertirse en la aventura frustrada de la aventura frustrante de las leyes del 53, 62 y 71. Se está convirtiendo en el gran riesgo, en este caso, por la falta de concreción legal en algunos temas.

También quisiera hacer un llamamiento a SS.SS. Hemos vivido unos días pasados en los cuales parece ser que la política nacional y los problemas nacionales han estado dominados por determinadas cuestiones en Andalucía. Que se me perdone el regionalismo, pero cuando hablo de Andalucía, Castilla o Extremadura, me refiero a las zonas de aplicación normal del campo de esta Ley, dadas sus características. Y se ha hablado mucho de los fondos de empleo comunitario en la prensa, en esta Cámara y en negociaciones políticas al más alto nivel que puedan ser posible en España, pero no se ha dicho que una de las causas de la esperanza en Andalucía y en general en el

campo es la movilización de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, y lo quiero decir no para entonar un canto aprovechando la situación del país, porque ni muchísimo menos es mi intención, sino simplemente para resaltar que la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables se tiene que cumplir.

Existen una serie de impedimentos legales, como son estos que nosotros estamos denunciando aquí, y existen otros que son objeto de otra proposición no de ley que ha entrado en la Cámara para ver el cumplimiento y seguimiento de la Ley. Ahora no hay plazos, o nosotros no sólo no los controlamos, sino que no tenemos conocimiento más que por cifras absolutamente de determinados ejercicios pasados, normalmente coincidentes con declaraciones de prensa y la comparecencia de altos funcionarios del IRYDA, así como los estudios o series de avances económicos que hace el Ministerio de Agricultura cada período de tiempo.

Hay que decir muy claramente que la esperanza que supuso la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables (y la idea de los socialistas es que esta esperanza efectivamente sea verdad) hace preciso que hagamos un esfuerzo por parte de todos. No lo digo con ánimo de derrota, puesto que el criterio del Gobierno ha sido expresado en el sentido de que se va a oponer. Lo que quiero es que SS.SS., fundamentalmente el Grupo Parlamentario Centrista que apoya al Gobierno, tengan en cuenta que esta concreción en esta proposición de ley es puramente instrumental, pero que tiene una raíz de fondo profundo en el sentido de que la gente empiece a creerse que el cumplimiento de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables va a ser positiva.

Por esta razón, sabiendo que no va a producir gasto público, creo que ni directa ni indirectamente, porque este año es muy difícil que se produzca gasto público, con la seguridad en todo caso de que no se va a producir gasto público excesivo, y el gasto público que se va a originar es por el cumplimiento de esta ley que hemos votado en esta Cámara, es por lo que les pido a ustedes que reconsideren su posición y voten a favor de esta proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Gobierno ha conferido su representación para este debate a favor del diputado don Francisco de la Torre Prados.

Tiene la palabra el señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE PRADOS: Señor Presidente, señoras y señores diputados, las razones de la oposición del Gobierno a la tramitación de esta proposición de ley han quedado claras con la lectura que se ha hecho por el Secretario de la Cámara de esa oposición. Pero la intervención del portavoz del grupo proponente, el Grupo Socialista, hace necesario explicar quizá un poco más esas razones y contestar o aludir a lo que ha dicho en su intervención el señor Calahorra.

El Gobierno considera que esta proposición de ley no es necesaria desde el punto de vista de la agilidad de la tramitación de la aplicación de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, porque los datos que hasta ahora se tienen en el Gobierno en cuanto al ritmo de aplicación de la ley, a los expedientes iniciados, a la tramitación de los mismos —luego lo veremos en detalle—, no hacen necesario, repetimos, el que se insista en la oportunidad de modificar la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, señalando un plazo para la tramitación, digamos la duración de dos expedientes y en el sentido de marcar un plazo que se requiera el plan de explotación y mejora. Luego explicaremos más en detalle las razones que apoyan esta afirmación.

En segundo lugar, es también necesario decir como razón que sería una cláusula de no seguro cumplimiento; no quiero decir de imposible cumplimiento, pero, en algún caso, de no seguro cumplimiento, porque puede producirse lo que se dice en el informe del Gobierno, una acumulación de expedientes, puesto que puede iniciarse de oficio la actuación de la Administración o como consecuencia de denuncias, denuncias que pueden venir en número superior a la capacidad de la Administración para poder despachar toda esa tramitación que se pide en dos meses, o en plazo superior que se pusiera si el número de expedientes creciera de una manera absolutamente imprevisible. Por tanto, sería absurdo que, sabiendo que se pueda dar esa circunstancia, se marcara ya ese plazo.

Por otra parte, el argumento de la seguridad jurídica que ha expuesto el portavoz del grupo proponente no es necesario, no es un argumento, digamos, convincente, puesto que ya hay en el conjunto de disposiciones legales suficientes determinaciones que amparan al administrado en relación con cualquier lentitud de la Administración que se pudiera considerar excesiva, y en concreto basta recordar el contenido del artículo 61 de la

Ley de Procedimiento Administrativo, del año 1958, que marca el plazo de seis meses. No obstante, no hay lugar a la preocupación de que se pueda llegar a los seis meses cuando veamos las cifras concretas de cómo se va aplicando y desarrollando la ley.

Como recordarán las señoras y señores diputados, la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables considera varios supuestos en los cuales se puede aplicar. Estos supuestos hacen que no sean por tanto un material homogéneo al cual tiene que dedicar la atención la Administración. Hay lo que se llamaba o consideraba en el artículo 2.º de la Ley de Fincas, aquellas en las que de modo manifiesto no se aprovecharan correctamente los medios y los recursos disponibles, como consecuencia de obras construidas o auxiliadas por el Estado u otros entes públicos, correspondientes al apartado b) del artículo 2.º. Hay también las fincas del apartado c) —no me detengo en el a), porque hay menos casos desde el punto de vista estadístico—, las fincas cuya superficie sea superior a 50 hectáreas de regadío o 500 de secano, o aprovechamiento forestal, en las que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Expropiación Forzosa, deben realizarse las intensificaciones de cultivo o aprovechamiento que atendiendo al interés nacional sea necesario para incrementar adecuadamente el empleo en función de las condiciones objetivas de la explotación.

Del contenido de estos dos apartados y del tipo de finca a que se refieren se deduce inmediatamente que aquellos supuestos a los que se refiere el apartado b) del artículo 2.º son de una mayor facilidad de estudio, de una mayor homogeneidad; dispone la Administración de una serie de datos en muchísimos casos, porque son fincas en que ha habido actuaciones del Estado, como es la transformación en regadíos. Hay una información concreta de cuáles son los índices medios de producción, de empleo y de actividad en la comarca; se tienen planos desde el punto de vista del terreno de la misma comarca y de la finca en concreto; hay un material (no se parte de cero) que permite que efectivamente lo que es el informe previo, los estudios posteriores, la ampliación de datos o los estudios agronómicos necesarios se realicen con una rapidez mayor que en el caso de las fincas c), donde en muchas ocasiones no hay el menor material de información del tipo de planos, cartografía, ni siquiera tampoco se puede disponer de los índices de la comarca, sobre todo

en el comienzo de la aplicación de la ley, porque hay que recordar que es en 25 de marzo de 1980, el año pasado, cuando (cumpliendo los plazos previstos en la ley, que se aprobó a finales de 1979) sale la Orden ministerial donde se establecen las características a las cuales se han de referir los índices comarcales que permitirán saber si hay más fincas a las que se les puede aplicar la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables.

Esta circunstancia, esta matización o esta diferencia es muy importante recordarla, porque a la hora de analizar cuál es el ritmo con que la Administración va resolviendo los expedientes y llegando a ese punto que tanto preocupa al Grupo Socialista, como a todos los grupos debe preocupar lógicamente, del requerimiento del plan de explotación y mejora, es distinto según sea uno u otro tipo; y, en cualquier tipo, para ser riguroso y serio, es lógico que se haga separando las fincas que están contenidas en el supuesto b), en el apartado b), de las que están en el apartado c).

Efectivamente, la información que puedo ofrecer a SS. SS. son dos estudios-muestra, muestra estadística, del conjunto de fincas. Uno, del tipo b), está realizado sobre 125 fincas (no sobre la totalidad, puesto que es una muestra), donde da un promedio de tiempo desde que se ha redactado el informe previo y está firmado hasta que se requiere el plan de explotación y mejora; es decir, desde que se realiza, durante el tiempo que se han realizado todos estos estudios complementarios, a que alude el señor Calahorro, que son necesarios realizar para añadir al informe previo, y que supone un plazo de un mes y medio. Insisto en que es una información complementaria y que el informe previo está redactado. Este tema es un poco complejo, porque en la proposición de ley no queda claro lo que se pretende, si es que quiere limitar a dos meses el espacio desde que se ha realizado el informe previo o desde el comienzo, digamos, de la primera noticia que haya de la finca en el IRYDA, bien sea por oficio o bien sea por denuncia; desde que se realiza la visita o desde que se recibe la denuncia, que podría ser otra forma de medir el tiempo, y luego aludiremos a ello.

En el caso de las fincas c), es una muestra más reducida, porque el colectivo de fincas estudiadas es menor, 10 fincas, y da un promedio de dos meses y medio para la realización de todos esos estudios que permiten, repito, a la Administración, y en concreto al IRYDA, requerir el plan de explotación y mejora. Y este estudio quiero añadir que

está hecho en un sentido —y es una observación que añado a los datos que dispongo de la Administración— excesivamente riguroso para la propia Administración, para el propio IRYDA, porque en la fecha que se toma desde que se realiza el informe previo, en dos casos de estas 10 fincas se ha puesto una fecha inclusive anterior a la terminación, publicación y aprobación de la ley, y tenía que ser lógicamente posterior a la Orden ministerial de 25 de marzo de 1980, porque hasta ese momento no estaba en condiciones la Administración de poder realizar realmente ese informe previo a los estudios necesarios que preceden, repetimos una vez más esta idea, al requerimiento del plan de explotación y mejora. Y aun así, añadiendo en los dos casos estos cinco meses adicionales a la duración que hubiera sido normal, rigurosamente exacta, salen solamente, repito, dos meses y medio.

A lo largo de esta exposición he aludido a que hay un espacio corto de tiempo en el promedio de la experiencia estadística —puede haber algún caso fuera de este promedio, como pasa en todo promedio estadístico—, en los más de mil casos estudiados —ahora daré las cifras exactas utilizadas en la actualidad por parte del IRYDA—. El espacio de tiempo que transcurre desde la visita, en los casos en que la Administración actúa de oficio o por denuncia, hasta que se redacta y firma el informe previo (no hasta que se comienza a redactar, sino hasta que se redacta y firma, que es el otro momento en que empieza a contar el tiempo), en este estudio que acabo de dar a SS. SS. es de mes y medio, solamente mes y medio, lo cual no deja de ser meritorio, cuando ha habido casos en algunas provincias o en Delegaciones provinciales del IRYDA en que se ha acumulado un número considerable de denuncias. Se pueden citar casos concretos, como es el ejemplo de Huelva, donde se ha podido hacer frente a ese trabajo con una diligencia y con un esfuerzo que hay que resaltar. Puede haber y hay casos en que se haya superado este plazo, pero el promedio muestral de la aplicación de la ley, y debemos ir lógicamente al ejemplo que resume la totalidad, es de esa fecha.

Vemos, por tanto, que no estamos en un caso llamativo ni escandaloso de dilación, considerando que esta ley, como otras que puedan estar en la mente de SS. SS., pero en concreto ésta, podía suponer, era lógico pensarlo, en su comienzo, en su aplicación, una cierta acumulación de tareas,

porque estuvieran embalsadas en la demanda social y en la realidad de algunas fincas a las cuales se pudiera aplicar la posibilidad que esta ley supone de intensificación de cultivos y dinamización de la tierra, como he dicho antes. Aun así, estando en el primer año de aplicación de la ley, nos encontramos con una cifra promedio de tiempo francamente aceptable, con independencia de los casos excepcionales que puede haber, a los que luego aludiré también, así como la forma de plantear la actitud o el sistema parlamentario que nosotros entendemos que sería adecuado. En efecto, hay otros caminos más lógicos que modificar la ley, en una cosa que entendemos que no está justificada, y que serían plantear una pregunta o cualquier tipo de interpelación —la pregunta es lo más lógico—, para tal vez algunos casos concretos que pueda haber y que estén fuera de lo que es normal, de lo que es promedio, en que pueda suponerse que hay alguna actuación que podríamos calificar de lenta o no diligente por parte de la Administración.

Hablábamos de los dos argumentos, de innecesarios y de no asegurar su cumplimiento, y ahora tenemos que aludir a la exposición que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista en relación con el punto del informe del Gobierno donde se alude al posible incremento del gasto público. Creo que no ha entendido bien el portavoz del Grupo Socialista esta razón a que alude la Administración. Está claro que cuando hay esa acumulación de expedientes provocada por denuncias, como el caso concreto de Huelva, ya mencionado, u otro que se pudiera plantear, que han pasado sobre todo en los primeros meses (luego daremos para información de la Cámara las estadísticas que demuestran un poco el ritmo que se produce de estos expedientes), la realidad es que si la Administración tuviera un plazo fijado, digamos totalmente limitado y escrito en la ley, como pretende el Grupo Socialista, sea el que fuera, dos meses o más, si quiere cumplir ese plazo y hay esa acumulación y de la Administración no ha dependido marcar el ritmo y ha de hacer frente a los expedientes, es evidente que no tendría más camino que realizar una contratación, si no quiere desatender otros trabajos o tareas en otras provincias, y hacer un incremento de personal, que supone un incremento del gasto público, para una tarea que puede ser temporal o coyuntural. Ese es el sentido claro y lógico al que se refiere la respuesta de la Administración. No es que al trabajar más

haya más gasto público; no es eso, sino que, lógicamente, la máquina de la Administración, que está preparada para ritmos constantes, lógicos, de trabajo, con sus puntas más o menos, si de pronto viene una acumulación no prevista, por aquello de que en esta ley pueden plantearse los expedientes —y esta idea es básica en la argumentación— no solamente de oficio sino por denuncia y por tanto no previsiblemente, no está en la mano de la Administración marcar la fecha en que comienza a contar el plazo, y si contamos, repito, desde la fecha de la denuncia, no podemos poner un tope. Otra cosa es que después, en el análisis, a la vista de la coyuntura y de la situación, juzgando los hechos según sean, según el número de expedientes, el número de casos, el informe, el número de fincas que haya que ver, se examine si hay razones o no para cualquier tipo de calificación en torno a si el trabajo de la Administración ha sido o no diligente.

Los datos que yo he expuesto hasta ahora a SS. SS. demuestran que hay una diligencia y que se está afrontando la aplicación de la ley con prontitud y, por tanto, ante la ley que despertó esperanzas y expectación, no hay motivos para que se vea esa esperanza defraudada en absoluto. Hasta ahora, fecha 1.º de mayo de 1981, las fincas visitadas en aplicación de esta ley son 1.050: 154 como consecuencia de denuncias y 916 como consecuencia de una actuación de oficio de la Administración. Cifras interesantes, porque demuestran que hay una actuación, y es lógico que así sea, por parte de la Administración en la mayoría de los casos. Eso afecta a estas fincas visitadas y supone una superficie de 380.000 hectáreas.

De estas fincas, su clasificación por grupos, correspondiente al artículo 2.º, serían al primer caso, apartado a), 25; al apartado b), 819 y apartado c), 226. Son unas cifras importantes, y hemos recordado la dificultad que tienen los estudios correspondientes al tipo de fincas llamadas c) en el artículo 2.º.

En la exposición del portavoz del Grupo Socialista se refería a qué pasa con los expedientes, qué ocurre, cómo están. Vamos a coger datos de 1.º de enero. Decía que de 866 fincas visitadas, si no recuerdo mal, hay 318 expedientes sobreesidos y con informe previo 826. De esos informes previos, que es cuando está el informe redactado, cuando ha transcurrido ese mes y medio a que me he referido anteriormente, hay 328 expedientes

sobreseídos que ya se han comunicado a los propietarios; cuando son casos de denuncia también a los denunciantes se les comunica. Si hay algún caso en que no es así, hay muchas formas de plantear la protesta —digamos— o la crítica, pero no esta forma, que está fuera de lugar, como es la modificación de la ley. En otros 343 casos hay proceso de ampliación de datos.

El 1.º de enero de 1981, en 160 expedientes se consideran ya esos informes previos, traducidos en expedientes iniciados, de los cuales 145 tienen directrices, que es la fase previa al requerimiento del plan, porque la Administración, de acuerdo con la ley, tiene obligación de marcar las directrices que el administrado tiene que tener presente en el plan de mejora. En esas fechas estaban presentados solamente tres planes; estábamos en un momento en que los cuatro meses que tiene el administrado no se habían cumplido y sólo había tres presentados. A 1.º de mayo de 1981 estamos en los 1.070 a que antes de me referido —no sé si dije 1.070 ó 1.050—, 154 como consecuencia de denuncias. Fíjense SS. SS. que pasamos de 150 el 1.º de enero a 154 el 1.º de mayo, con lo cual se está demostrando la realidad de esa afirmación de que había un proceso lógico de acumulación de denuncias al comienzo y al mismo tiempo un aparente desinterés después por parte de los que pudieran plantear denuncias en los casos de fincas que pudieran ser objeto de la aplicación de la ley, pero que realmente puede significar que no hay más casos. La Administración sigue creciendo, y así los 736 de oficio a primero de enero se transforman en 916 a primero de mayo. No hay ahí un reblandecimiento o un tocar de techo, como ocurre en los casos de fincas visitadas como consecuencia de denuncias.

Vamos ahora a la comparación de los datos finales. Se han presentado ya planes de protección y mejora (cuando sólo había tres) en un número aproximado de 50. El 13 de mayo, actualizando más los datos todavía, la Administración aprueba ya 62 planes de explotación y mejora referentes a fincas cuya superficie total es de 7.500 hectáreas. Es un dato demostrativo de los efectos directos, no ya indirectos y disuasorios de la ley, que suponen con esos planes la creación de 170 puestos de trabajo fijos y 680 eventuales. Lo que efectivamente es difícil es medir cuántos efectos indirectos se han producido, de estímulo y de disuasión. En el mismo desarrollo del trabajo de la Administración he podido conocer que, en muchos de los

casos de los expedientes sobreseídos, se produce un fenómeno en el cual el propietario intensifica (sobre todo en el caso de las fincas tipo b) y fincas de zonas transformadas en regadíos por la Administración y el IRYDA), el administrado reacciona con prontitud, establece una intensificación de cultivos y es una de las razones por las cuales deja de verse, porque no había razón —en otros casos se sobreesee, porque no había razón—, un proceso de estímulo directo —no diría indirecto— en relación a la intensificación de los cultivos.

Por todas estas razones —recordemos una vez más que no hay inseguridad jurídica—, el Gobierno ha contestado al trámite de información sobre esta proposición de ley oponiéndose a su tramitación y entendiendo que cualquier caso que pudiera existir —repetimos una vez más esta idea—, en el cual se juzgue que no hay una aplicación diligente de la ley —casos puntuales puede haber—, hay otras vías más lógicas, desde el punto de vista parlamentario, para expresar la preocupación de los grupos. Pero la información estadística, lo más actualizada posible que se ha podido traer a la Cámara, demuestra que el ritmo de aplicación de la ley es diligente, es importante, afecta a un número de fincas y superficie también importantes, y no hay en absoluto motivos para la desesperanza.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

El señor GARCIA GARCIA: Señor Presidente, para fijar la posición en nombre de nuestro grupo.

El señor PRESIDENTE: Sabe que es un trámite en el que intervienen sólo proponente y Gobierno. Se vota sin debate, según dice literalmente el Reglamento y, a continuación, se puede explicar la posición en trámite de explicación de voto.

Se somete a decisión de la Cámara si se toma o no en consideración la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre informes previos de fincas manifiestamente mejorables.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; 139 favorables; 144 negativos; seis abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Mantengan cerradas las puertas, que vamos a hacer una votación de verificación. (*Rumores.*) Vamos a hacer votación de verificación. (*Rumores.*) Vamos a hacer una votación de verificación; razón de más si hay una discordancia entre los dos marcadores.

Tiene la palabra el señor Herrero.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: En atención a las relaciones de cortesía parlamentaria que siempre tienen el Grupo de UCD y los grupos de la oposición, y a lo simpática que nos resulta nuestra compañera que acaba de entrar en el hemiciclo, no vamos a objetar su participación en la votación, pero creo que sería conveniente que nadie entrara una vez que se va a proceder a la verificación.

El señor PRESIDENTE: Si algún diputado ha entrado con posterioridad a la votación anterior, tenga la bondad de ausentarse de su escaño.

Vamos a proceder a la votación. (*Pausa*)

Efectuada la votación por el procedimiento de levantados y sentados por filas, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; 121 afirmativos; 129 negativos; seis abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre informes previos de fincas manifiestamente mejorables.

Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Comunista, tiene la palabra el señor García García.

El señor GARCIA GARCIA: Señoras y señores diputados, brevemente.

El Grupo Parlamentario Comunista ha votado afirmativamente la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y ello porque compartimos las razones que ha expuesto aquí el señor Calahorra y, por consiguiente, no me quiero detener en esas razones, quiero simplemente señalar algunas cuestiones concretas.

Es verdad que la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables es la primera disposición votada en el Parlamento democrático en que había una posibilidad de transformaciones estructurales en nuestro campo, en las cuales estaban todas de

acuerdo. Tenemos que avanzar si queremos comenzar a enfrentarnos con los problemas del paro, tan trágicos en Andalucía, en Extremadura y en algunas otras zonas de España, y con algo más que el inseguro e insatisfactorio empleo comunitario.

Se nos ha dicho en la respuesta del Gobierno oponiéndose a la toma en consideración, que se exigen toda una serie de estudios previos antes de poder llegar al planteamiento del requerimiento realizado al propietario. Pero yo quiero recordar el texto de la ley, y el texto de la ley es que se fijarían unos criterios objetivos para la determinación de fincas manifiestamente mejorables, y estos criterios objetivos que se fijaron, y quiero reconocerlo aquí, dentro del plazo, es decir, en el primer trimestre de 1980, el 25 de marzo, eran exclusivamente tres: el nivel de empleo, la intensidad de utilización de la tierra y las producciones obtenidas. A continuación, en tres puntos consecutivos, se dan las claves para llegar a estas conclusiones, y nada puede ser más sencillo, señor Ministro, porque determinar el número de obreros fijos que puede emplear la finca, determinar la producción por hectárea en relación con las de la misma comarca, o el número de cabezas de ganado por hectárea que pueden sostener los pastos, e indicar la producción expresada en pesetas o por cabeza de ganado en relación con las obtenidas fincas semejantes, no son problemas tan complicados para poder llegar a la determinación de la presentación del requerimiento del informe previo.

Naturalmente, después, los cuatro meses de que dispone, en dos plazos, el propietario para poder presentar el Plan de mejora, son meses que pueden ser utilizados por la Administración para completar, sedimentar, argumentar todas y cada una de las condiciones agronómicas del terreno, etcétera, para que luego, al enjuiciar el plan que le propone el propietario, a los cuatro meses, pueda tener un criterio ya perfectamente definido.

(El señor Presidente se ausenta de la sala y ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, Fraile Poujade.)

Yo quiero decir que la razón que se da es reconocer que no se va a aumentar el gasto público. Efectivamente, no hay necesidad de aumentar el gasto público con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, aunque quiero señalar que nuestro grupo parlamentario, ya en la discu-

sión de los Presupuestos anteriores, y se propone repetirlo en la discusión de los Presupuestos para 1982, consideró que el presupuesto del IRYDA tendría que ser incrementado en cantidades importantes si queremos que pueda estar en condiciones de cumplir las mínimas exigencias que el campo está ya hoy planteado, con carácter cada vez más urgente, y que algunas de las disposiciones que salen de esta Cámara van a imponer sobre el IRYDA.

Señor Ministro, defienda usted en la discusión áspera, como me imagino, dura, que habrá para la distribución de los recursos escasos, no solamente el incremento del presupuesto de agricultura, sino muy particularmente el incremento del presupuesto del IRYDA.

Después tengo que decir que el Grupo Parlamentario Comunista se propone presentar una serie de proposiciones concretas sobre otros aspectos de la Ley de Fincas Mejorables, a los que no voy a aludir aquí, porque el señor Presidente me podría llamar la atención de que me salgo del tema, pero no quiero desaprovechar estos minutos para decir que no es posible que la información sobre la marcha de la aplicación de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables sea tan insatisfactoria, tan incompleta y tan difícil de lograr como lo es ahora mismo.

Señor Ministro, los parlamentarios, incluso los miembros de la Comisión de Agricultura, nos vemos en enormes dificultades para tener cifras concretas de la marcha de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. Tenemos que estar al acecho de lo que publica la Prensa; tenemos que estar comprobando qué periódico da una mejor información y, aun así, como los periodistas no son especialistas y, además, tienen que trabajar a una gran velocidad, como lo exige la platina y lo exige la inexorable orden de salida, se utilizan frases que llenan de confusión al simple lector. Por ejemplo, en una información resumen puesta en boca del Ministerio de Agricultura y publicada por «El País» el día 12 de junio de 1980, se dice que el Instituto de Reforma Agraria ha iniciado expedientes de expropiación sobre 87 fincas. Yo creo que no ha llegado la hora todavía, según los plazos requeridos por la ley, para que se haya iniciado ningún expediente de expropiación. Sin embargo, esto es lo que se publica en un periódico tan serio como «El País».

Igualmente, por ejemplo, en otra información, también de Prensa, del día 27 de octubre de 1980,

se dice que el Instituto ha pedido de oficio un Plan de mejora a los propietarios de 129 fincas. Naturalmente, si esto era el 27 de octubre, eso quiere decir que los dos primeros meses, serían el 27 de diciembre, que los dos segundos meses, serían el 27 de febrero, que la Administración tenía otros dos meses para poder hacer al plan o poder aceptarlo y, después, los quince días para poder discutir si era o no conveniente el plan. Ya deberíamos estar en esas circunstancias. Y es aquí, hoy y por este debate, y en boca de mi colega y compañero de Parlamento en Málaga, Francisco de la Torre, donde me entero de que, efectivamente, han sido aprobados 62 planes de mejora. Pero me entero aquí y hoy gracias al señor De la Torre Prados.

Por ello, pediría que, sin más trámite y sin esperar la nueva propuesta que hará el Grupo Parlamentario Comunista, se facilite a la Comisión de Agricultura información lo más completa, lo más detallada y lo más satisfactoria y con una regularidad suficiente.

Por otra parte, la aceptación de la proposición de ley, que es una norma de nuestro grupo parlamentario, en este caso no implicaba que el Grupo de la UCD no pudiese enmendar el plazo de dos meses si realmente consideraba que era un plazo excesivamente constriñente, aunque, según las informaciones que nos ha dado el señor De la Torre Prados, no es tampoco tan grave, porque algunos de ellos han cumplido en el plazo de mes y medio y otros en el plazo de dos meses y medio. Habrían podido ustedes, señores representantes de la UCD, enmendar la proposición de ley, si la hubieran aceptado y hubiera sido admitida a trámite.

Sin embargo, esa es una laguna, es un cabo que se nos quedó suelto en la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, y sería satisfactorio que pusiésemos un plazo, porque si no estamos en la más completa y total inseguridad en un problema de vital importancia para la mejora estructural de nuestra agricultura.

Perdón, muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y para explicación de voto, tiene la palabra el señor Calahorro.

El señor CALAHORRO TELLEZ: Muy brevemente, señor Presidente, señorías, simplemente

para decir, en este trámite de explicación de voto, puesto que el procedimiento evitaba que hubiera un turno de réplica, que precisamente la intervención correcta, como siempre y como es habitual en él, del señor De la Torre, no sólo no nos ha convencido, sino que nos ha reafirmado más.

Concretamente, ha dado otros datos que estaban desde los últimos días, en el sentido de que había 1.050 fincas visitadas y de estas 1.050 sólo había 150 por el procedimiento de denuncia. Y fíjense SS. SS. que decía que la razón principal por la cual yo no había entendido lo del incremento del gasto público era que podía darse una avalancha, puesto que el procedimiento de denuncia está abierto a un procedimiento de expediente en el IRYDA, que haría imposible la actuación del IRYDA sin que se incrementaran las plantillas o las actuaciones y, directa o indirectamente, el gasto público. Resulta que sólo aproximadamente el 15 por ciento de todas las fincas visitadas en su totalidad lo ha sido por el procedimiento de denuncia. Y hay más. Desde enero hasta mayo sólo se han dado cuatro casos.

No creo que haga asfixiar la maquinaria administrativa del IRYDA el que se hayan dado cuatro casos en el plazo de tres meses, y por eso sigo diciendo que no tiene presentación la razón de que esto podía incrementar el gasto público.

Pero es que hay una segunda cuestión en la cual nos aclaran que de las últimas fincas 318 han sido sobreseídas. Todavía quedan 157, según sus cifras, sin saber en qué situación están, y este es el caso de inseguridad jurídica al que nosotros aludíamos.

Pero hay otra razón fundamental y es que ha sido aprobada la posición del Gobierno con los apoyos de unos grupos y con las abstenciones de otros, cuyo interés en el tema era manifiestamente claro al ver el sentido de su voto. Sin embargo, quería dejar claro que la única salida que nos ha dado, y hay que agradecerlo, y lo agradecemos con cierto deje de ironía, que no sé si lo sabré imprimir, es que nos dejan abierto el camino de las preguntas. Me gustaría que el señor De la Torre nos hubiera dicho si era oral o por escrito y sabríamos qué hacer en estos casos. El camino de las preguntas orales o por escrito está en el Reglamento y ha sido un camino y una generosidad, entre comillas, que, desde luego, no la vamos a estimar en ese sentido. La estimamos como una mera ironía.

En segundo lugar, se nos dice también como

exculpación a la Administración, a la que por supuesto, ni a ella ni a la maquinaria administrativa del IRYDA estamos acusándolas de nada, que ha habido muchas denuncias por oficio, lo cual es contradictorio con el gasto público. De estas actuaciones y de estos expedientes habrá algunos que lleven hasta diez años y doce años en manos de la Administración. Las leyes son de 1953, 1962 y 1971, luego no quiere decir que se haya aligerado muchísimo la actuación de la Administración, sino simplemente que se han desempolvado los viejos expedientes que existían.

Además, en la prensa han existido una serie de criterios. Quiero recordar, porque ha salido en la prensa, que un señor, don Julio Sánchez Barriga, especificaba que a él no le habían inspeccionado y había salido en una de las listas, que era por el procedimiento que establecía el artículo 2.º a), con fincas insuficientemente cultivadas. Decía que no había ido nadie a visitarle. Este expediente es tan antiguo, que ya se había segregado la propiedad y le correspondía a él 250 hectáreas y tenía 48 su padre. Esto quiere decir que la Administración en este caso está teniendo una diligencia que yo diría que no se puede hablar de máxima con ese criterio que se ha expresado aquí de la misma.

En segundo lugar, los procedimientos de denuncia no son tantos, lo cual justifica que no hay incremento del gasto público.

En tercer lugar, sólo hacer una referencia a que la concreción de que tenemos abierto el camino de las preguntas me parece «bastante generoso», entre comillas. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Por el Grupo Parlamentario Andalucista, para explicación de voto, tiene la palabra el señor Arredonda.

El señor ARREDONDA CRECENTE: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Andalucista ha votado positivamente la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, como es norma en nuestro grupo.

No hemos entendido las razones del Grupo Parlamentario de UCD de no dar su voto favorable. Creemos que las explicaciones que ha dado su portavoz son precisamente para haber tomado en consideración la proposición de ley, porque se nos habla de que los plazos prácticamente se están cumpliendo con unos intervalos entre un mes

y dos meses y medio. Pero, en cualquier caso, en la propia tramitación de la proposición de ley podrían haberse modificado esos plazos.

¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que estamos ante un dato, ante el dato de llevar a la práctica, de imprimir con voluntad política que la ley sirva para algo, que sirva de efecto inducido y que tenga efectos indirectos. Es decir, que la amenaza, el temor, cumpla un determinado efecto. Pero eso no es suficiente. Lo importante sería que se viera la voluntad política de llevarlo a la práctica. Y sería un dato de que había voluntad política de llevarlo a la práctica, la fijación de un determinado tiempo, dos meses, o especificar otro tipo de tiempo, o cuantificarlo de otra forma diferente. En definitiva, lo que daba el dato era el imprimir el carácter de voluntad política de llevarlo a cabo y esto fue lo que se nos dijo, y se nos dirá probablemente cuando entremos en el estudio y tramitación del proyecto de ley del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En aquella ocasión el portavoz de UCD nos vino a decir que era arcaico que los grupos de izquierda y de la oposición hablásemos de reforma agraria, que la reforma agraria no tiene sentido cuando existe la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. Es decir, que se nos contraponía el que tuviera determinadas competencias exclusivas la futura Comunidad Autónoma porque ya existían unos instrumentos válidos para llevar a cabo algo que en Andalucía es absolutamente prioritario y que sin ello estaremos permanentemente hablando de parches, como es el empleo comunitario.

Este es el fondo de la cuestión. Es un tema en el que no se puede ir cautelosamente. Es un tema en el que hay que aplicar la cirugía. Es un tema que exige la voluntad política de hacerlo con rapidez y removiendo los obstáculos que sean necesarios.

Este era el punto de una ley; era un detalle, un dato de una voluntad política. Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Para explicación de voto, por el Grupo Centrista tiene la palabra el señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE PRADOS: Señor, Presidente, señoras y señores diputados, hablo en nombre del Grupo Centrista en este caso para explicar el voto, en primer lugar, por coherencia con nuestra posición, que fue la de todos los grupos en la aprobación del texto definitivo de esta ley, donde quedó de esta forma, tal como nosotros mantenemos que quede. En segundo lugar,

porque los datos que anteriormente he expuesto, hablando en nombre del Gobierno, del desarrollo de la ley, demuestran que se está aplicando diligentemente, con rapidez, haciendo frente a lo que podía ser una acumulación de trabajo por denuncias o por expedientes de oficio que, lógicamente, la Administración tenía que iniciar y que sería mayor en los primeros meses que en los posteriores. Pero haciendo frente, de acuerdo con los datos que he traído aquí a conocimiento de la Cámara, a lo que significa una responsabilidad en el cumplimiento de la ley y demostrando de esa forma, inequívocamente, una voluntad política, porque la voluntad política, señor Arredonda, no se demuestra simplemente con que se ponga en el texto tal o cual cifra de meses o de plazos, que hemos demostrado que podría crear problemas en el desarrollo o aplicación de la ley en ciertas zonas o provincias donde hubiera un número de expedientes superior al promedio. La voluntad política se demuestra con los hechos, con las estadísticas, con las cifras, y esa voluntad, diligencia y rapidez, con 1.070 fincas, con cerca de 40.000 hectáreas, visitadas en mayo de 1981, con el número de planes de explotación y mejora requeridos, de los que antes hemos hablado, y los ya aprobados con los efectos indirectos a los que me he referido.

En la explicación de voto es lógico aludir a la argumentación expuesta por el portavoz del Grupo Comunista, que creo que confunde lo que es el artículo 4.º de la ley con el artículo 5.º.

El artículo 4.º decía y dice: «El Ministerio de Agricultura, oídas las Cámaras Agrarias y las Organizaciones Agrarias de ámbito nacional, establecerá periódicamente los criterios objetivos que sirvan para la determinación de las fincas manifiestamente mejorables...». Eso es lo que recoge la Orden ministerial de 25 de marzo de 1980.

Pero en el artículo 5.º se indica claramente que la Administración iniciará los expedientes para determinar las fincas rústicas que pudieran estar comprendidas en el artículo 2.º de la presente ley, requiriendo, cuando haya lugar, a los interesados para que presenten un Plan de explotación y mejora con sujeción a las líneas generales que se las señalen sobre las transformaciones precisas, coste aproximado de las inversiones requeridas, ritmo de ejecución y plazo para la determinación del plan, que no podrá ser superior a tres años, salvo que se integre en planes de conjunto de mayor plazo elaborados por la Administración.

Todo ello demuestra que la Administración tiene que abordar para cada caso, no de tipo general, como señala la Orden ministerial, del artículo 4.º de la ley, sino para cada caso, los expedientes, los informes previos, de cada una de las 1.070 fincas visitadas, todos esos estudios complementarios agrarios que permitan luego al administrado saber cómo puede hacer ese plan de situación, qué líneas directrices tiene que recoger en el plan, que tiene cuatro meses para desarrollar, y que si no lo hiciera la Administración correctamente, el administrado según dice el artículo 5.º, podría defenderse perfectamente, y ya no estaría obligado en ese plazo de cuatro meses que el ley señala, dos prorrogables a otros dos. Por tanto, lo que quisiéramos ganar equivocadamente en este punto en que estamos, lo perderíamos después, y esto es importante, en cuanto a la eficacia de la ley, y también en cuanto a la inseguridad jurídica a que antes he aludido, porque nosotros tenemos la seguridad, valga la redundancia, de que hay mayor seguridad jurídica cuando se tiene tiempo suficiente, que no va a ser excesivo, como se demuestra con los hechos. La Administración necesita tiempo para efectuar todos los estudios precisos y poder requerir el plan de mejora con la seguridad de que hay posibilidad de que a la finca se le puede aplicar la ley, facilitando todos los datos necesarios al administrado para hacer el plan, y que el administrado no tenga escapatoria, que no tenga posibilidad, en definitiva de negarse a ese plan.

Por otra parte, tenemos la seguridad evidente de que se puede evitar, con esos estudios serios y en profundidad, cualquier tipo de error. Puede haberlo, evidentemente, pero hay menos posibilidades de que se produzca con este planteamiento, aun en un caso, no muy probable, pero se puede dar, como el de Huelva, en el que se acumulan los expedientes.

El portavoz del Grupo Socialista trata de decir que en la medida en que ya se haya producido toda esa acumulación posible de denuncias, y no haya lugar, no hay motivo de preocupación en esa acumulación de expedientes. Hasta cierto punto, porque si de los 154 expedientes o informes previos las fincas visitadas por denuncia en primero de mayo en la provincia de Huelva son mayoría —dos tercios—, lo mismo ocurre en el caso de Jaén, provincia que conoce muy bien el señor Calahorra, donde solamente hay cinco, y de oficio 193, digamos entre paréntesis. Pero puede producirse en cualquier momento y en cual-

quier otra provincia, en la que en teoría fuera potencialmente aplicable la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, una circunstancia similar a la de Huelva, que puede tener una explicación, que yo no conozco, pero que en teoría se podría dar, del tema. No daremos las cifras globales, sino las cifras provinciales, porque serán los equipos provinciales de la Administración, en este caso del IRYDA, los que tendrán que hacer frente a esa acumulación de expedientes y resolverlos todos. Entendemos que desde el principio, según parece que proponía el Grupo Socialista, hasta el requerimiento del plan, es un plazo evidentemente corto para esa posible acumulación de los dos meses, y permitiría la escapatoria del administrado, defendiendo los cuatro meses, diciendo que no tiene información suficiente para hacer el plan, y creando una inseguridad e ineficacia en la aplicación de la ley que nosotros estamos muy lejos de desear.

Por eso, y repetimos una vez más esta argumentación, nos hemos opuesto a la tramitación de esta proposición de ley.

Nada más y muchas gracias.

— SOBRE LIBERTAD DE EDICION DE IMPRESOS PERIODICOS SIN LIMITACION DE FECHAS (DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO)

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre libertad de edición de impresos periódicos sin limitación de fechas.

No existe criterio del Gobierno ni de la Comisión. Por lo tanto, se concede la palabra al grupo proponente para hacer la defensa de la proposición de ley.

En nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Cano Pinto.

El señor CANO PINTO: Señor Presidente, señoras y señores diputados, hablar de libertades de expresión, de libertades de prensa en un país que tantos años las ha tenido amordazadas, constituye todavía, a estas alturas del proceso democrático español, uno de los mejores ejercicios para tomar el pulso a la salud del Estado. Cualquier atentado contra las libertades de expresión, de cualquier tipo que sean, es un atentado contra la

misma democracia. Jefferson diría aún más: «Atentar contra las libertades de expresión es atentar contra la misma seguridad del Estado».

También es verdad que la libertad, esa columna que debiera vertebrar y sostener la convivencia de los ciudadanos, las leyes a veces la reducen a una columna tan delgada de espesor que ni siquiera puede sostener a las libertades, de quienes las niegan todas. Y nunca más que ahora, en estos momentos históricos e históricos de democracia vigilada y de censura implícita, en esta hora en que sectores de la sociedad española manifiestan con descaro que la salud del Estado y la sanidad de la democracia consisten en el silencio y en la administración del derecho a la información, mi grupo parlamentario desea manifestar que la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de circulación de las noticias y el derecho a la información constituyen un requisito indispensable para la consolidación de la democracia. Porque un pueblo sin libertad de expresión es un pueblo en dictadura, un pueblo sin derecho a la información es un pueblo que se dedica a hacer chistes con olores de cloaca al lado del estercolero que hay junto a las barras de las tabernas. Y de todas formas, a quienes con cinismo digan que la verdad no es digerible por los estómagos débiles hay que decirles que lo único que no soportan las democracias débiles es precisamente el hambre de democracia.

¿Cómo se justifica esta proposición de ley sobre libertad de edición de impresos periódicos sin limitación de fechas? ¿Por qué y para qué?

Yo debo reconocer que si no viviéramos en un país que es paraíso de leguleyos, filibusteros políticos y doctores en leyes no escritas, sería ésta una proposición de ley estéril. En materia de prensa la mejor ley es, por supuesto, ninguna. Porque cualquier ley lo único que hace es limitar el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión. Es decir, la intención y el contenido de esta proposición están escritos ya en el artículo 20 de la Constitución. Se reconoce la libertad y el derecho de edición de impresos sin limitaciones temporales, sin paréntesis ni vacíos en su ejercicio. La libertad de expresión es un derecho indivisible, es un derecho continuo, es un derecho homogéneo. Y cualquier quiebra en este sentido se llama lisamente censura.

Sin embargo, esta proposición de ley no es una proposición inútil ni estéril. Y mucho menos, es una proposición técnicamente impertinente, por-

que sólo tiene un artículo y, además, muy claro. Y es que la ceremonia de confusión existente sobre libertades de expresión por culpa de la aplicación todavía de normativas legales derogadas, por culpa de no saber en muchos casos hasta dónde llega y hasta dónde no la derogación de la Ley de Prensa y otras leyes; la ceremonia de confusión sobre libertades de expresión por culpa de la voracidad del poder y su pasión en controlar al cuarto poder que es el que en realidad controla al poder político, y especialmente la amarga y picaresca de grupos de presión con intereses inconfesables en el mundo de la prensa; las presiones contra la libertad de edición de periódicos por parte de sectores informativos de estructura corporativa y con afinidades de fascismo declarado; la defensa, en fin, por parte de camarillas de triste historia de los privilegios que amasaron en épocas de censura para todos menos para ellos, todo esto hace que esta proposición de ley no sea superflua, ni que sea superfluo el reconocimiento explícito de un derecho que ya está en la Constitución.

Libertad de edición de impresos periódicos sin limitación de fechas porque así lo dice la Constitución y porque también ella garantiza la no discriminación de cualquier tipo que sea. Pero también libertad de edición todos los días para terminar de una vez con los privilegios que constituyen atentado manifiesto al derecho a la información. Para desterrar a los reyes por un día que utilizan el trono de los lunes sin compartir y en exclusiva. Porque hay que decir de una vez por todas que la mercancía, la información, las noticias, no son propiedad ni patrimonio de ninguna empresa informativa. Las noticias y el derecho a ellas son patrimonio del lector, del ciudadano. No basta en este caso que la Constitución proclame el derecho de expresión sin limitaciones de tiempo. Porque a tres años de su vigencia se está aplicando normativa legal abiertamente contraria, y el derecho de edición algún día de la semana es reservado a unos pocos privilegiados y como si el mercado de la información fuera un coto de caza.

No basta, por lo tanto, decir que en la Constitución está reconocido el derecho que esta proposición explícitamente propone, porque la realidad es que existen zares de papel para los lunes y mandarines de las información que, en virtud de gozar en exclusiva del privilegio del mercado por nefasta herencia, convierten el derecho a la infor-

mación total en un derecho servido a la carta y al capricho de quien administra las noticias.

Y digo que esta proposición es necesaria, porque también la Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda o al trabajo y miren ustedes lo que pasa. Es necesaria para que unas leyes no desdigan lo que dicen otras. También el artículo 12 del Fuero de los Españoles proclamaba solemnemente la libertad de expresión y, sin embargo, las hemerotecas de las tres décadas que siguieron a su proclamación constituyen el archivo más dolorido de la represión de las libertades en España. Son los años de la prensa amordazada.

La Ley de Prensa de marzo de 1966 parece que levanta la mordaza impuesta por una ley de guerra. No existirá la censura previa, pero nacerá la autocensura. Sería injusto no reconocer las distancias kilométricas entre una y otra ley por lo que a las libertades se refiere. Pero también sería injusto no constatar que los primeros años que siguieron a 1966 son los que más expedientes de todo tipo registran en periódicos, revistas y periodistas.

En la mente de todos está la muerte violenta de publicaciones asesinadas en nombre de la libertad de prensa y, precisamente, las pocas que tuvieron la valentía y el coraje de oponerse a la dictadura. Los que sufrimos expedientes hasta por escribir sobre libertad religiosa y el desprecio de un periódico por motivaciones políticas, no podemos olvidar que los omnipotentes administradores de la libertad de prensa desde el año 1966 administraban solamente la libertad a su medida.

La ley del 66 también escribe de nuevo el derecho a la libertad de expresión, pero esta libertad es puesta a renglón seguido en entredicho en su ejercicio temporal con una normativa legal que prohíbe la edición de periódicos los lunes, consagrando los privilegios que tuvieron su origen en Primo de Rivera. Y lo que entonces quizá tuvo justificación de distinta índole, a partir de 1966 es sólo una ocasión para la defensa de las castas y procedimiento de control político, al tiempo que las «Hojas del Lunes» se convirtieron en puntuales botafumeiros hebdomadarios del régimen y sus gestores.

Sin embargo, y a pesar de la libertad de expresión de la llamada Ley Fraga y a pesar de la libertad de circulación de las noticias, cuál no sería el chasco que se llevaron sus pioneros al conocer los

resultados de una encuesta del Instituto de la Opinión Pública en 1966 que decía: el 60 por 100 de los españoles no habían oído hablar del Plan de Desarrollo, el 58 por 100 no había oído hablar de la guerra del Vietnam y el 60 por 100 declaró no saber quién era el señor Fraga.

Con la aprobación de la Constitución se llega en materia de prensa, y en otras materias, a una situación de auténtica perplejidad. Todavía se hacen por los pontífices de la confusión proclamas de fe en normativas derogadas sobre la libertad de edición de impresos periódicos y en una especie de lucha a muerte por la supervivencia. La inseguridad jurídica en el tema de la información es evidente, una inseguridad ciertamente alimentada por intereses bastardos que defienden los privilegios. Y, sin embargo, esta inseguridad jurídica no debería existir porque el artículo 20 de la Constitución es claro y la Disposición derogatoria tercera también. Por si fuera poco, el Gobierno ya en 1978 y por boca del Ministro de Cultura, Pío Cabanillas, declaraba: «La derogación de la Ley de Prensa se da por supuesto. Lo que se está pidiendo es el certificado de defunción para algo que ya no existe».

Y sigo diciendo que esta proposición de ley no es superflua en estas fechas en que se nos amenaza con una Ley de Información (ya hay por ahí sinistros borradores) que mucho nos tememos algunos que no sea simplemente un valladar a la libertad de expresión.

Un prestigioso director de periódico ha dicho que «un país democrático no necesita ningún tipo de legislación sobre prensa y que las leyes ordinarias bastan para establecer los controles sociales precisos al respecto». A estas iniciativas se les llama simplemente hostilidad a los medios de comunicación social y miedo a la libertad. Y la sensibilidad intolerante del poder contra la libertad de expresión y de crítica —añado yo— oculta siempre posos de fascismo.

No sé cuándo se van a convencer algunos de que la crítica al poder no lo erosiona en una democracia; antes bien, constituye un fabuloso soporte de la arquitectura misma de la democracia. Lo que hace falta es no una Ley de Información sino cristalizar una ayuda a la prensa, removiendo los obstáculos objetivos que atentan a su supervivencia; como la protección a los papeleros nacionales, la permanencia de la cadena azul, la concurrencia desdeal de TVE, los regímenes de

monopolio informativo y un largo etcétera. De nada serviría que la Constitución proclamara la libertad de expresión como cimiento mismo de la democracia si después se toleraran procedimientos directos e indirectos de control político y económico. Y no cabe duda que la limitación del ejercicio de la libertad de edición de impresos algún día a la semana contradice frontalmente el espíritu liberal de la Constitución española. El propietario de un periódico o agencia en ningún caso puede serlo del derecho —y menos en exclusiva— a la información, que es propiedad de todos los ciudadanos.

Es evidente, como dice el fundamento de la proposición de ley, que los privilegios de edición de impresos los lunes limitan sustancialmente el derecho de la información, al tiempo que contribuyen gravemente a la desinformación y desculturación de todos los españoles. Los monopolios informativos engendran monolitismo que es una forma de desinformación ilustrada. ¿Y por qué razones los lunes pueden ser un día de abstinencia informativa o simplemente de ayuno? No hay razón justificante alguna para que los españoles podamos leer seis días el periódico que queramos y uno el que nos impongan. Si esto es así, el lunes podría llamarse el día de la España que bosteza. *(Risas.)*

Y yo quiero advertir a S.S. SS. —a pesar de que se rían algunas— sobre la situación de involución informativa si en este Congreso tiene entrada un proyecto de Ley de Información que circula por ahí y que en medios periodísticos conservadores ha sido calificado de aberrante. Aberrante porque mantiene intocada la Ley Fraga con excepción de la censura. Aberrante porque permanecen en el monopolio del lunes, el monopolio de la Agencia Efe, el monopolio del carnet y una serie de controles indirectos. Estos señores mantienen la teoría de que el monopolio es bueno cuando es suyo. De todas formas, antes de que esta proposición sea aprobada —y esperemos que lo sea— tenemos ya jurisprudencia que avala su contenido; una sentencia concretamente que ha estado, por supuesto, del lado del artículo 20 de la Constitución y no del lado de los privilegios informativos de la época de la dictadura. Como todos ustedes saben, el periódico «Diario 16» salió a la calle un lunes e inmediatamente se desencadenó la tormenta de los derechos adquiridos; derechos adquiridos por quienes durante tantos años habían estado durmiendo en el confort de su holgada cama el sueño

de la incompetencia —de la ausencia de competencia informativa, quiero decir—. Y qué fácil es hacer un periódico cuando en el quiosco era el único que se vendía. El presidente de la Agencia Efe, y también presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa, presenta la correspondiente denuncia al sentir en su carne lesionados privilegios inconstitucionales de edición de impresos los lunes por la mañana. El fallo del juez instructor, de fecha de 4 de diciembre de 1980, concluye con el sobreseimiento de las actuaciones —leo entre comillas— «con todos los pronunciamientos favorables para los denunciados» por el señor Ansón.

En definitiva, la Secretaría de Estado para la Información rechaza las argumentaciones sobre la vigencia de la legislación franquista que pretendían mantener el monopolio de los lunes. Y el argumento más sólido de la Secretaría de Estado es consecuencia de la única interpretación posible al artículo 20 de la Constitución y de la regulación de las libertades contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Otra argumentación de la Secretaría de Estado para la Información contra el privilegio de los lunes es la referida a la libertad de empresa, amparada también en la Constitución, y también la libertad de empresa informativa, por supuesto. Pero, ¡ojo! concluir como concluye una «Hoja del Lunes», el 24 de noviembre pasado, al comentar con tinta sobre papel de los peores usos de esta proposición de ley diciendo que los socialistas nos confundimos con liberales porque estamos en ella consagrando el principio del «laissez faire, laissez passer», es simplemente una grave frivolidad. Los socialistas, al defender esta proposición de ley, que lleva de alguna manera implícita la libertad de empresa informativa, no estamos instaurando ningún liberalismo trasnochado ni nos hemos vendido por un plato de lentejas, sino que estamos defendiendo lo que siempre hemos defendido: la libertad de las empresas informativas, que es cosa muy distinta. Estamos defendiendo el derecho activo y pasivo a la información, que choca frontalmente contra los monopolios de la misma que la secuestran precisamente en la sublimación del liberalismo.

No trata tampoco esta proposición de ley, como quieren ver pescadores de río revuelto, de atentar en absoluto contra las «Hojas del Lunes» en una —leo entrecomillado— «insidiosa ofensiva dirigida por distinguidos cerebros de UCD».

Esta proposición de ley apoya descaradamente la libertad de expresión, incluida la de las «Hojas». Pero lo que de ninguna manera apoya esta proposición de ley es el monopolio de una información que es propiedad de los lectores; ni el mantenimiento de situaciones de privilegio contra los derechos fundamentales del hombre; y mucho menos, no sirve en absoluto de cobertura a cacicazgos sustentados por un fascismo subconsciente que vaya dirigido a la educación monolítica del sujeto de la información, y, en definitiva, para la alineación total en virtud de la manipulación informativa.

Una gran patraña esgrimida por los defensores a ultranza del monopolio de los lunes contra el artículo 20 de la Constitución es la patraña de los derechos adquiridos. Y aquí hay que decir que no se adquieren derechos contra el derecho mismo. En dictadura no se adquieren derechos para practicarlos en democracia. Estos derechos adquiridos despiertan sospechas en todos los juristas serios y sirven solamente para encubrir todas las arbitrariedades. Y, ¡ojo!, no es lo mismo mantener derechos adquiridos que mantener situaciones adquiridas, que es eso lo que se quiere decir.

Nadie niega a las «Hojas» el derecho adquirido a salir los lunes. Lo que sí les niega la Constitución es el derecho a salir ellas solas. Y un analista tan poco sospechoso como Ernesto Rossi dice que «los acuerdos monopolísticos de reparto de mercado informativo están siempre condimentados por los fascistas con salsa corporativa». El problema que les aterra a estos señores es el problema de la competencia. Y para esta enfermedad, y para continuar el privilegio de salir a los quioscos, el único remedio es la calidad de la información. En Prensa la calidad, la objetiva, o como prefieren otros, la honestidad posible es el mejor antídoto contra los peligros de supervivencia.

No se saque aquí el demagógico argumento de los posibles trabajadores que van a ir al paro si se termina el monopolio de las «Hojas». La Constitución no está para enviar trabajadores al paro, sino para garantizar el trabajo de todos. Si algún periódico tiene que cerrar lo hará sin duda por uno de estos tres motivos: o por culpa de la estructura informativa general y particular, y en ese saco están todos metidos, o por culpa de una incompetente gestión empresarial o, en fin, por obra y gracia de la mala calidad del periódico que se ofrece al lector. Pero lo que es de todo punto

intolerable es que se argumente que los trabajadores se van al paro por culpa de la libertad de expresión reconocida en la Constitución.

Téngase en cuenta además que las finalidades y objetivos que perseguía la Real Orden de 1.º de enero de 1926 creando las «Hojas Oficiales de los Lunes» están prácticamente periclitados. Lo mismo puede decirse del contenido de la Real Orden de 13 de junio de 1930. Convertidas estas publicaciones en órganos de las Asociaciones de Prensa con fines asistenciales, la Orden del Ministerio de Información y Turismo de 13 de marzo de 1952 reglamenta su funcionamiento, definiendo su situación como de privilegio. El monopolio de las «Hojas» se basa aquí y ahora en Ordenes ministeriales de 21-5-65 y 13-3-68. Y digo que las intenciones de la creación de las «Hojas del Lunes» están hoy prácticamente periclitadas. El carácter asistencial de las Asociaciones cambió radicalmente con la inclusión de los periodistas y demás trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social. Y de todas formas, la libertad de edición de periódicos los lunes por la mañana no colisiona en absoluto la continuidad de las actividades asistenciales de las Asociaciones de la Prensa.

Tampoco está hoy en vigor aquella buena intención que latía detrás de la creación de las «Hojas» consistente en que éstas serían hechas por periodistas en paro. Hoy todo el mundo sabe que las «Hojas del Lunes» no las hacen los periodistas en paro, sino en el 90 por ciento los periodistas que tienen trabajo fijo en el periódico de cada provincia y que practican en la «Hoja» el español y sanitario pluriempleo. O sea, que periodistas en paro los hay por millares, y sobre todo, a partir de la salida de las primeras promociones de las Facultades de Ciencias de la Información. Por supuesto, estos periodistas noveles no se colocan en las «Hojas», que muchas de ellas están confeccionadas por periodistas con carnet regalado.

Señores diputados, esta proposición de ley es una proposición para la defensa de la Prensa y no contra la Prensa, y sobre todo una ley para la defensa expresa del derecho a la información. Porque no basta la solemne declaración constitucional para garantizar el ejercicio de ese derecho. Hoy ya no se habla, como en el editorial de «Solidaridad Nacional» de Barcelona el 26 de septiembre de 1965, de «la Prensa anárquica e insensata, causante del terrible drama del 36». (*Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente Fraile Pouja-*

de.) Hoy no se habla de Prensa insensata, pero sí de Prensa canallesca. Y es de público conocimiento la manifiesta hostilidad del poder político hacia la Prensa, la insensibilidad ante los problemas de la Prensa, el control directo e indirecto de las libertades de expresión, el alimento escandaloso de monopolios de agencia, el atrozamiento sobre la Prensa independiente que supone la dictadura existente sobre el papel-prensa.

No resisto la tentación de manifestar a ustedes mi pesimismo sobre el tema de las libertades de expresión, y a pesar de que fuera aprobada esta proposición de ley y mientras haya jueces en este país por los que parece no haber pasado la transición democrática, esta proposición de ley sería letra muerta del «Boletín Oficial del Estado» mientras una buena parte de la judicatura española sea el canchero puntual que custodie estas libertades. De todos es conocida la pasión de los jueces, de muchos jueces, contra las libertades de expresión.

Hay que decir muy claro...

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Le ruego que se ciña a la cuestión y, sobre todo, que no atente a la dignidad de otras instituciones del Estado, que podría estar atentando a ellas por vía reglamentaria.

El señor CANO PINTO: Le ruego me disculpe, señor Presidente, pero no es ésta mi intención.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Comprendo que no sea su intención, pero le ruego que el lenguaje lo ciña precisamente a su intención.

El señor CANO PINTO: Gracias, señor Presidente.

Hay que decir muy claro que el único canchero legitimado para la defensa de las libertades es la Constitución. Lo que es absolutamente intolerable —estoy leyendo entrecomillados aparecidos en Prensa diaria— «que sean funcionarios judiciales de la dictadura quienes parezcan tener mayor fuerza moral y mejor criterio que los hijos de la democracia y este Parlamento sobre los parámetros de la libertad». «Y antes o después» —estoy citando un ponderado editorial de periódico con ninguna sospecha de izquierdoso— «los sectores democráticos del Partido del Gobierno tendrán que elegir por construir aquí un régimen

de libertades o un régimen de cinismos». Y todo esto para no hacer trágica verdad el que «España sea un lugar donde un intento de golpe de Estado apenas supone mayor pena de cárcel que dos líneas de un editorial de periódico». Esto es lo que pasa cuando la Justicia se convierte en esclava de la política.

Esta proposición de ley, señores diputados, es una proposición para la defensa de la libertad y para la defensa de la Prensa. Y precisamente en esta hora en que empieza a brotar de nuevo toda una pléyade de guardias de tráfico de las libertades informativas vestidos con uniformes de los más variados colores y hechuras. La garantía de la libre circulación de las noticias no reside precisamente ahí, sino en desterrar de una vez por todas cualquier tipo de semáforo que detenga la circulación de las libertades.

Contra la libre circulación de las noticias y contra el contenido de esta proposición de ley están precisamente asociaciones y organismos que no han sabido superar su etapa de grupos de presión corporativa y que es preciso limpiar de intrusos y de funcionarios del poder. «Es necesario convertir las Asociaciones de Prensa —que son las que editan las «Hojas del Lunes»— en verdaderas asociaciones de periodistas que no escriben al dictado y no en cotos de privilegios o de graciosos servicios al que manda». Y es que el título de paladines de la libertad de expresión hay que ganarlo de la única manera posible: practicando esa libertad sin sumisiones y «sin querencias estamentales y corporativas que arrullan los sueños del primer franquismo». El monopolio lunático de las «Hojas del Lunes» (aparte de llevar en su vientre una manifiesta dosis de inconstitucionalidad) es una expresión más del fascismo y corporativismo de Mussolini, Salazar, Primo de Rivera y Franco.

Vivimos horas, señores diputados, de continua y variopinta agresión a la Prensa y a la libertad de expresión y circulación de noticias que esta proposición de ley intenta defender. Una agresión a veces promovida incluso desde instancias institucionales. A partir de 1977 fue una ley antilibelo aplicada con sectarismo. Ha seguido una acción pública aplicada con sectarismo. Ha seguido una acción pública y continuada de los fiscales. A partir de 1980 la escandalosa irrupción de los tribunales militares contra los periodistas. Y para qué hablar de la situación presente de resignación en una desesperanza cuyo fin ningún futurólogo

se atreverá a predecir. Y todo ello en virtud del vaciado sistemático de contenido democrático por parte de quienes ejercitan el poder, de leyes que deberían ser para la defensa de las libertades y que, por el contrario, cavan la fosa de la libertad de expresión al tiempo que constituyen una agresión directa al artículo 20 de la Constitución. Y es que no se puede tratar de la misma manera a la redacción de un periódico que a una casa de prostitución, según un editorial de un periódico de la mañana de Madrid. (*Rumores.*)

Libertad de expresión y de información total por lo tanto, y sin limitación de fechas para la edición de periódicos y circulación de las noticias. Sin limitación de fechas, «porque quienes predicán y respetan la libertad de mercado como orgía perpetua del capitalismo» —y estoy citando a Francisco Umbral— «deberían respetar también el mercado informativo que tiene derecho a todos sus prospectos y a cualquier hora; desde los que reparten los Hijos de Jehová hasta los que reparten los hijos de quien sea». Y libertad de expresión total y a secas porque es la libertad de expresión sin limitaciones uno de los pilares fundamentales para sostener la democracia.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): A los efectos de este debate, el Gobierno confiere su representación al diputado don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que tiene la palabra.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Señor Presidente, vamos a decir que sí, pese a la dramática intervención que me ha precedido, porque así como hay cosas que se votan afirmativamente por sus propios fundamentos, en este caso yo creo que hay que votar pese a los fundamentos que se han dado.

Realmente, en la intervención del digno representante del Grupo Socialista que me ha precedido, habría —lo pongo en condicional—, habría, repito, cosas muy graves, porque se ha injuriado prácticamente a todo el Estado español: se ha injuriado a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, a la Administración de Justicia, a una dignísima clase de periodistas. Se ha injuriado a todo. Lo que pasa es que se ha hecho de tal manera y con tal falta de autoridad, que es una injuria que tampoco se puede tomar muy en cuenta.

Nosotros vamos a decir que sí a esta proposición de ley, aunque nos parece una proposición

de ley típicamente catártica —y utilizo una frase acuñada por mi buen amigo don Luis Solana—, es una proposición de ley catártica que no tiene ninguna finalidad ni posibilidad normativa, porque lo único que hace es reiterar que está vigente la norma constitucional.

Por supuesto, lo que la proposición dice —dice que «quedan derogadas cuantas normas se opongan a la limitación temporal de la libertad de expresión reconocida en el artículo 20 de la Constitución»— es cosa sabida y aceptada; y tan aceptada y tan sabida que, según se nos ha dicho aquí, existe una jurisprudencia que ya acredita ese criterio, criterio, por otra parte, bien conocido: la aplicación directa de determinadas partes de nuestra Constitución.

Por cierto que menos mal que otras opiniones jurídicas contribuyeron a obtener esta jurisprudencia, porque si se hubieran fundado las alegaciones en los motivos que hemos oído aquí, estoy por pensar que la jurisprudencia hubiera sido contraria. (*Risas.*)

Por supuesto que el artículo 20 de la Constitución rige, y por supuesto que rige directamente, y por supuesto que eso no empece a que pueda haber una serie de limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión que, según decía un autor famoso en la ciencia política, como los setos en el camino, están para conducir al caminante y no para impedir su paso. Y por supuesto que esa libertad, como toda libertad, es susceptible de autolimitaciones que los propios usuarios de la libertad se impongan a sí mismo. Lo que pasa es que las autolimitaciones tienen que ser autolimitaciones y no heterolimitaciones.

Pero, una vez dicho esto, no comprendo qué es realmente lo que la proposición de ley que aquí se nos presenta añade a la Constitución. A nuestro juicio, no añade nada, y por eso nosotros, al darle el sí en este trámite parlamentario, no juzgamos nada sobre el término que tenga esta proposición, porque consideramos que incluso el grupo proponente, si reconsidera debidamente la proposición, puede llegar a la conclusión de su inutilidad. Nosotros, en todo caso, le damos aquí el sí y no vamos de ninguna manera a obstaculizar su curso. Lo que creemos es que es una proposición que se hace probablemente de cara a la galería, como suponemos que se ha hecho, aunque con fortuna realmente incierta, el largo alegato que aquí hemos oído.

Esta proposición no añade nada; no hace más

que constatar algo que la Constitución dice, que gran parte de la doctrina ha afirmado, que la jurisprudencia ha reconocido y que, además, está en la práctica de la calle todos los lunes y probablemente se ampliará esta circunstancia de hecho.

Por todo eso consideramos que no tiene mayor trascendencia. Tal vez haya sido simplemente el clavo, un clavo donde colgar un alegato nada afortunado y una retórica realmente desmedida.

Considerar que la eventual desculturización española procede de una mala lectura de los lunes, aparte de ser una injuria a un dignísimo periódico que se publicaba, se publica y esperamos que se seguirá publicando los lunes, es una versión verdaderamente «lunática» de lo que es cultura en España.

Muchas gracias, señor Presidente. *(Risas.)*

El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

El señor PRESIDENTE: Sometemos a decisión de la Cámara la toma o no en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre libertad de edición de impresos periódicos sin limitación de fechas.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 262 votos emitidos; 243 favorables; nueve negativos; 10 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda acordada la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre libertad de edición de impresos periódicos sin limitación de fechas.

Para explicación de voto, por el Grupo de Coalición Democrática, tiene la palabra el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero dejar expresa constancia de que el único propósito de mi intervención es explicar en este trámite el voto de abstención del Grupo de Coalición Democrática y no entrar en polémica alguna sobre las curiosas y a menudo notables interpretaciones históricas, jurídicas y constitucionales de la motivación del proponente. A pesar de que hubiera podido invocar el trámite de alusiones personales y otros,

creo que esta intervención es de las que por sí mismas se alaban, no es menester «alaballas». Si esto es una intervención en defensa de la libertad de expresión, habría que recordar aquello de «guárdenme de mis amigos porque de mis enemigos me guardo yo.» *(Risas.)*

Sentado esto, quiero decir que nosotros estimamos, como ya se ha puntado en otra intervención, que en la parte que supone reafirmación de libertad de prensa y de expresión en general, establecida en la Constitución la proposición es innecesaria, y en la que supone, por el contrario, entrar en un problema que propiamente no es legislativo, sino que ha sido objeto y debería ser objeto de una amplia información (cómo resolver el complejo conjunto de problemas que plantea el hecho de que, teniendo siete días la semana, se haya hecho uno para descansar), ese problema tiene que tener solución. En Inglaterra está resuelto, como es sabido, porque los periódicos hacen dos ediciones con redacciones separadas: una los domingos, con nombre distinto, y otra que sale los otros días. También hay problemas que siguen subsistiendo, se quiera o no, de ayudas a las asociaciones profesionales.

La asociación profesional no tiene necesariamente nada de corporativa; es una asociación profesional que, por cierto, pocas con tan buena, importante y democrática tradición como las Asociaciones de la Prensa, y el problema está en que por una autolimitación primero, que se remonta ya a los tiempos de Eduardo Dato; después por disposiciones que son de los tiempos de Primo de Rivera, época en que se hicieron bastantes cosas buenas y otras menos buenas, es lo cierto que hoy ese tema sigue planteado. Y el problema de si debe resolverse esta cuestión de una vez, suprimiendo la situación actual que ha subsistido casi 60 años, prácticamente más de 60 años, incluyendo los tiempos de autolimitación incluso de la Segunda República, es un tema sobre el cual nuestro grupo ha preferido no improvisar, y por esa razón, lamentándolo mucho, y siempre en defensa de la libertad de prensa, en la mejor defensa que algunos han practicado con hechos que en su tiempo no fueron fáciles, se ha abstenido en la votación.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Comunista, para explicación de voto, tiene la palabra el señor Riera.

El señor RIERA MERCADER: Señor Presidente, señoras y señores diputados, brevemente voy a intentar explicar nuestro voto, que ha sido favorable a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Lo hemos hecho así porque es una cuestión de principio (nosotros hemos votado todas las proposiciones de ley en su toma en consideración) y porque nos parecía también una propuesta razonable.

Pero, dicho esto, yo pienso que debemos plantear los posibles inconvenientes que podrán deducirse de la aprobación, si es que ésta se lleva a cabo con la misma redacción con que se ha hecho esta proposición de ley. Por tanto, nuestro voto ha sido un sí, pero... ha sido un sí preocupado; y, sinceramente, tengo que decir que, después de oír la intervención del representante del Grupo Socialista, esta preocupación no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y lo digo sinceramente porque esta propuesta no está al margen de una realidad que significa que nos encontramos ante un sector que está en una crisis muy grave. Nadie podrá negar que el sector de la prensa y de la información escrita se encuentra en una crisis grave y que, por tanto, cualquier medida que se proponga tiene que tener en cuenta el marco en que se va a desarrollar y las posibles consecuencias que puede tener una medida de este tipo.

Nosotros, y pienso que todos los grupos representados en esta Cámara, estamos de acuerdo en que el tema de la prensa tiene que abordarse de forma global, que todas las fuerzas democráticas deben tener dos objetivos fundamentales, que son: proteger el pluralismo, que es la mejor forma de ejercer y proteger la libertad de expresión y defender los derechos de los trabajadores de este sector, que se encuentra (y está reconocido por todo el mundo) en una situación difícil y en un paro creciente. Por consiguiente, éstos deben ser los dos objetivos que nos mueven a la hora de presentar y promover una serie de medidas que son necesarias e imprescindibles para abordar de forma frontal y globalmente los problemas de la prensa.

Evidentemente, el tema de fondo de la proposición de ley es el de poder editar periódicos los lunes, con las consecuencias que esto puede tener. A mí, desde luego, me han extrañado los fundamentos de la proposición de ley, como también alguna parte de la intervención, en la que casi, casi se hacía culpable de todos los males cultura-

les de nuestro país a la edición de las «Hojas del Lunes». Yo creo que el tema es más profundo y más global y que no es sólo de las «Hojas del Lunes», sino que son otros temas que nos deben preocupar y que debemos abordar globalmente.

¿Qué va a significar la presentación de una proposición de ley en la que se pide que se puedan editar periódicos los lunes? Es evidente, en principio, que tenemos que estar de acuerdo en que se proponga esto, pero también debemos garantizar que el pluralismo, el derecho de los trabajadores se reconozca a la hora de presentar esta proposición de ley.

Es claro que van a salir algunos periódicos los lunes y que van a arrastrar a otros a la necesidad de poder competir y salir también los lunes. Sabemos los costes que tiene la posible edición en un día como es el lunes y que, por tanto, se tendrán que pagar, si se hace por este camino, aunque no lo quieran las centrales sindicales, horas extraordinarias. Por consiguiente, el coste del periódico será más caro y algunos, al no poder salir los lunes, estarán en una desventaja de competencia con estos periódicos, pero además la posibilidad de comprar de estos periódicos también se encontrará disminuida. El primer posible efecto que pueda tener esto es que esta competencia que se puede originar, se va a acrecentar si se aprueba la proposición de ley tal como está y no aprobamos o no hacemos un esfuerzo para que se tomen medidas que puedan ayudar a este sector de la prensa que está en una crisis profunda, y ello puede arrastrar, queramos o no, a que se profundice la crisis y que, por tanto, algunos periódicos, al no poder competir, se encuentren al margen de la posibilidad no ya de salir los lunes, sino de salir los otros días de la semana.

Aquí se ha hablado de las «Hojas del Lunes», de las Asociaciones de la Prensa. Evidentemente, es un tema delicado y difícil. Todos conocemos la experiencia de las «Hojas del Lunes» durante la dictadura y el papel que jugaron; sabemos que algunas Asociaciones de la Prensa no son democráticas, y también sabemos que en estas Asociaciones de la Prensa, en algún caso concreto, hay personas a la cabeza de estas entidades que no son un ejemplo de democracia y que, por tanto, nos pueden dar la imagen de que las «Hojas del Lunes» lo único que hacen es ayudar a los sectores más reaccionarios. Por consiguiente, hay que promover una campaña para poder terminar con las «Hojas del Lunes».

En cambio, para nosotros —en este caso estoy hablando de mi circunscripción electoral, Barcelona— la experiencia de las «Hojas del Lunes» es muy distinta a la experiencia de las mismas en otros lugares de España. Resulta que la Asociación de la Prensa de Barcelona es democrática y en su Junta participan las personas que más han trabajado por la libertad de expresión en los momentos más difíciles de la dictadura. La «Hoja del Lunes» ha creado puestos de trabajo y no existe este problema de personas que trabajan en la «Hoja del Lunes» y en otras empresas, habiéndose conseguido —pienso— un periódico, con todos sus defectos y problemas, que realmente defiende el pluralismo.

Por otra parte, las «Hojas del Lunes» tienen que ser periódicos independientes gestionados por los propios periodistas, independientemente de que las Asociaciones de la Prensa en algunos lugares no sean democráticas, pero lo que está claro es que esto viene más en función del proceso, de la necesidad y de las posibilidades que desde cada Asociación de la Prensa se haga para democratizarlas, que no sean unas entidades en las que, de por sí, no haya nada que hacer, sino que sean entidades en las que hay que procurar que tengan pocas posibilidades de continuidad. Esto lo sabemos todos. La posibilidad de que las «Hojas del Lunes» desaparezcan va a repercutir en las propias Asociaciones de la Prensa.

También hay un problema laboral que tampoco debemos desconocer, y es que el que se puedan editar periódicos los lunes va a crear más puestos de trabajo, pero también va a perjudicar y a hacer posible que se puedan cerrar periódicos, y no sólo «Hojas del Lunes» —repito que el problema no está sólo ahí, sino en un proceso de monopolización de la prensa escrita—, sino que vamos a ocasionar que en un sector que está en una crisis muy grave, ésta se pueda acentuar aún más. Y esto lo digo leyendo simplemente dos notas de prensa de Comisiones Obreras y UGT que han puesto en consideración las dificultades que pueda crear la posibilidad de que se editen periódicos los lunes. Por ejemplo, Comisiones Obreras de la Prensa dice que «ante los intentos de algunas empresas del sector de editar diarios los lunes por la mañana, manifestamos nuestro más absoluto desacuerdo; entendemos que a medio plazo atentaría contra el derecho de los trabajadores de Prensa al descanso dominical; recrudescería la competencia

empresarial en un momento de crisis profunda de la prensa escrita y, en definitiva, comprometería seriamente el equilibrio financiero de los propios diarios, dado que en la mayor parte de los casos no habría más que incrementar las pérdidas».

La propia UGT, en nota publicada hoy en «El País», dice: «Si realmente no hacemos gestiones para que los diarios de los lunes no puedan crear más problemas a los trabajadores de la Prensa, nos podemos encontrar también con dificultades». En concreto, la UGT dice que «la aparición de diarios de los lunes no signifique una ampliación del número de jornadas laborables ni un aumento de las horas extraordinarias de las actuales plantillas de los periódicos».

En torno a la edición de periódicos —sigue diciendo la nota de UGT— todos los días de la semana, incluidos los lunes, el Congreso ha recomendado a la Comisión Ejecutiva, elegida en el mismo Congreso, que se oponga a cualquier medida orientada a aumentar el número de jornadas.

Queramos o no, es un proceso sobre el que en los periódicos donde se tiene la intención de salir los lunes se ha hecho ya alguna encuesta entre los propios trabajadores y no han pasado del 10 por ciento los que querían que los periódicos salieran los lunes, lo que va a significar también un perjuicio evidente para estos propios trabajadores.

En resumen, creo que nos encontramos con una proposición que inicialmente podemos votar favorablemente, pero una proposición de ley en la que debemos tener en cuenta que si no se arbitran otras medidas, si no conseguimos introducir enmiendas que puedan significar que el desarrollo de esta proposición no aumente la crisis de la prensa, nos podemos encontrar, en lugar de querer ayudar y apoyar a la libertad de expresión, que es un sentimiento que tenemos todos los diputados de esta Cámara, nos podemos encontrar con que se restrinja esta libertad de expresión, en función de que se restringe también el pluralismo.

En definitiva, pensamos —y éstas van a ser nuestras propuestas— que es preciso abordar la crisis de la Prensa de forma global y que las medidas tienen que articularse de forma que puedan garantizar los dos principios fundamentales: los derechos de los trabajadores y la libertad de expresión, sobre la base de garantizar el pluralismo. Este ha sido el sentido de nuestro voto.

Quería terminar pidiendo que, cuando discuta-

mos esta proposición de ley, todos los grupos hagamos un esfuerzo para que el buen sentido que pueda tener la misma no pueda causar perjuicios en un sector que se encuentra en una situación tan difícil y, sobre todo, en un intento también de apoyar a una prensa a la que, independientemente de sus defectos y dificultades, también tenemos que ayudar para que pueda ser independiente y

garantizar —lo que es fundamental— el pluralismo en los medios de expresión.

El señor PRESIDENTE: El Pleno se reunirá de nuevo mañana, a las cuatro y media de la tarde.

Se suspende la sesión.

Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.

Precio del ejemplar 50 ptas.
Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Cuesta de San Vicente, 36
Teléfono 247.23.00. Madrid (8)
Deposito legal: M. 12.580 1961
Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID